

EXCLUSIÓN, INSURRECCIÓN Y CRIMEN

Gustavo Duncan

Universidad EAFIT y Universidad de los Andes

Colombia es un país extremadamente excluyente. Basta una mirada desprevenida a los listados de desigualdad para darse cuenta que en materia de ingresos, tierras, servicios estatales y muchas otras estadísticas sociales las brechas entre la población son enormes. El coeficiente de GINI, que mide la desigualdad de la riqueza de una nación, está entre los diez peores del mundo y mientras departamentos como el Chocó tienen ingresos promedios equivalentes a los de naciones subsaharianas, en ciudades como Bogotá los ingresos son similares a los de países de la antigua cortina de hierro que ahora hacen parte de Europa Occidental. No es extraño entonces que la exclusión haya sido una de las causas del conflicto más citadas. Si además se considera que durante los sesentas, período de formación de los principales grupos guerrilleros, el Frente Nacional¹ imponía restricciones a la competencia democrática, a la exclusión económica se le sumó la exclusión política como justificación de la violencia insurgente por ser la única alternativa para exigir cambios sociales.

Pero la realidad es mucho más compleja que eso. La desigualdad no necesariamente causa insubordinación, mucho menos una insubordinación violenta². No hay que ir a buscar otros casos de países donde

1 El Frente Nacional constituye un típico caso de pacto consociacionista (Hartlyn, 1993), en que las élites se reparten el control de gobierno para pacificar la competencia política, que en el caso colombiano se había salido de control durante la violencia de mediados de siglo, propósito en el que tuvo un éxito considerable. Es también una prueba que la violencia de fines de siglo XX respondió a motivos y circunstancias distintas.

2 La literatura científica al respecto en general rechaza la hipótesis que asocia desigualdad con conflictos internos. Ver Collier y Hoeffler (2004) para un análisis cuantitativo de los casos.

existe mucha desigualdad³ y no hay mayor conflicto social. En la misma Colombia proliferan sociedades muy desiguales que han resistido el paso del tiempo sin mayores desencuentros, incluso muy poca violencia. Tampoco es cierto que la competencia democrática haya sido en exceso excluyente. Aún durante el Frente Nacional el Partido Comunista, que abiertamente combinaba la actividad política legal con la organización de una guerrilla, participaba electoralmente a través de alianzas con los partidos tradicionales. De hecho, una práctica política asociada a la exclusión como el clientelismo político ha sido utilizada de manera masiva por sectores marginados para resolver sus problemas materiales. Se necesitaron entonces otras causas y otras variables para que en Colombia surgiera un conflicto armado, la sola exclusión no fue suficiente.

Este ensayo se centra en la forma como la exclusión interactuó con una de esas otras variables, la criminalidad, y dio gran parte de la forma que adquirió el actual conflicto. El interés es en concreto por dos prácticas criminales de uso masivo en Colombia: el secuestro y el narcotráfico. Estas prácticas son importantes porque incidieron en tres atributos fundamentales del conflicto. En primer lugar, perfilaron gran parte de la estrategia de guerra tanto de la insurgencia como de las diferentes formas de contrainsurgencia privada, desde grupos de vigilantes campesinos organizados por las fuerzas de seguridad del Estado hasta los ejércitos privados de los narcotraficantes. Las partes tuvieron que organizar sus aparatos coercitivos y planear sus acciones en el conflicto para acceder a los recursos provenientes de la criminalidad y/o para evitar que sus contrincantes accedieran a ellos.

En segundo lugar, el narcotráfico permitió que una situación de guerra permanente en vez de destruir la economía, dada la frecuencia del secuestro, la extorsión y los atentados contra la infraestructura productiva, se convirtiera en un medio de acceso a los mercados, sobre todo para comunidades periféricas donde la disponibilidad de capital era bastante limitada. El conflicto, por ser un medio de protección de una actividad criminal que canalizaba enormes flujos de capital hacia la periferia al mismo tiempo que agudizaba la exclusión de muchos sectores sociales, se convirtió en un medio de inclusión para muchos otros. Si por alguna razón el conflicto ha tenido tan larga duración ha sido precisamente porque ha dispuesto de una economía política coherente con las condiciones productivas en aquellas regiones donde los enfrentamientos han sido más intensos.

Finalmente, los efectos de la criminalidad no solo se remitieron a los pulsos de fuerza entre la insurgencia y la contrainsurgencia privada. También redefinieron las relaciones de poder entre las élites del centro y de la periferia a raíz de las decisiones que debieron tomarse para afrontar el desafío de la guerrilla. El secuestro no fue una amenaza unifor-

³ Hong Kong, Panamá y Chile son países con coeficientes de GINI por encima de 0,5 sin mayores problemas de conflictos internos violentos.

me. Terratenientes, caciques políticos y notables de la periferia, así como los narcotraficantes como nuevas élites económicas, fueron sus principales víctimas. Por lo que el paramilitarismo, como estrategia privada de guerra contrainsurgente, fue un fenómeno principalmente regional. A su vez, las transacciones políticas entre las élites del centro y la periferia estuvieron marcadas por el reclamo desde las regiones para utilizar el paramilitarismo y el narcotráfico como recursos legítimos contra el secuestro dado que el Estado central era incapaz de ofrecer una protección efectiva. Sin embargo, estos recursos terminaron por convertirse en medios de acumulación de poder. Las élites políticas regionales tenían ahora recursos como nunca antes para competir con sus contrapartes del centro. El conflicto había así, a través de los recursos que proveía la criminalidad, alterado los equilibrios de poder entre el centro y la periferia y entre élites legales e ilegales.

El ensayo consta de cuatro partes. La primera es una revisión de aquellas situaciones de exclusión que pudieran haber influido en la creación de organizaciones armadas. El análisis comprende la identificación de las comunidades donde surgieron los jóvenes que optaron por la lucha armada y el tipo de comunidades que respaldaron a las organizaciones armadas como solución a sus problemas de exclusión. La segunda analiza el secuestro como estrategia de guerra de la insurgencia para acumular recursos desde los márgenes de las áreas integradas del país. Si bien la guerrilla no ponía en riesgo el control del Estado en los centros poblados, tenían el impacto suficiente para destruir las bases del orden existente en la periferia. Como resultado se produjo una respuesta armada por las élites regionales, quienes eran las principales víctimas de los avances territoriales de la guerrilla. La tercera analiza el narcotráfico como una alternativa de financiación de la guerra para la insurgencia y la contrainsurgencia privada que en un momento dado se convirtió en un fin en sí mismo. Era difícil discernir cuando se acumulaba riqueza para hacer la guerra de cuando se hacía la guerra para acumular riqueza. La última parte propone una visión del conflicto distinta al gran enfrentamiento por definir la naturaleza global del Estado y de la sociedad entre dos visiones contradictorias: democracia liberal versus comunismo. Se propone más bien su interpretación como un pulso de fuerza por imponer de manera parcial y fragmentada determinadas instituciones de regulación social a lo largo del territorio: las del Estado central, las de las élites armadas de la periferia y las de las insurgencias.

EXCLUIDOS Y VIOLENTOS

A mediados de los setenta, cuando se cuece la violencia que va a sacudir en las últimas décadas a Colombia, los problemas de exclusión estaban presentes a lo largo de todo el país. El Censo de 1973 arrojó resultados de pobreza, medida por necesidades básicas insatisfechas (NBI), del 70,5% y el coeficiente de GINI estaba sobre los 0,5, una magnitud de extrema

desigualdad⁴. En otras palabras, exclusión había más que suficiente para generar una insurrección generalizada. Pero el grueso de las situaciones de exclusión no generó conflictos violentos, al menos no a una insurrección violenta de gran escala. La mayoría de los pobres y excluidos de Colombia, así estuvieran muy descontentos, no tenían dentro de sus planes dejarse arrastrar a una espiral de violencia. Los datos de pobreza de los Censos de 1973 y 1985 no coinciden con las regiones donde el conflicto sería más intenso en sus fases iniciales a principios de los ochenta. Más aun, Rubio (1999) y Gaitán (1995) encontraron que no necesariamente fue en las regiones más pobres que la violencia estalló cuando posteriormente las guerrillas se expandieron desde la periferia hacia las áreas integradas del país. Sus análisis estadísticos demostraron que, por el contrario, fue en regiones relativamente ricas y/o en donde surgían nuevas bonanzas, en que además no existía un fuerte desarrollo de las instituciones estatales, donde el conflicto se concentró.

Aunque investigaciones como las de Rubio (1999) y Gaitán (1995) fueron importantes para desmitificar la concepción tan simplista que pobreza y exclusión necesariamente se traducían en conflictos violentos en la sociedad, sus resultados tenían ciertos problemas metodológicos e interpretativos. Ante todo, el indicador utilizado en los trabajos estadísticos para identificar las zonas en conflicto solo capturaba la violencia, no el control territorial por guerrillas y paramilitares. Regiones bajo el control absoluto de guerrillas en la periferia más pobre y excluida del país podían ser bastante pacíficas, sus indicadores de tasa de homicidios eran mínimos⁵, pero estaban en el eje del conflicto porque desde allí era precisamente desde donde se radiaba el avance de la insurgencia. Del mismo modo, los análisis estadísticos escondían otra realidad, la mayor parte de la tropa insurgente y paramilitar provenía de los sectores excluidos de la sociedad indistintamente de donde se hiciera la guerra, fueran zonas ricas o pobres.

Si fueron pocos los excluidos que se involucraron inicialmente en el conflicto, si la violencia era indicativa del lugar de donde ocurrían los enfrentamientos, no necesariamente de donde se ejercía control territorial, y si los excluidos constituían el grueso de la tropa rasa que hacía la guerra surgen varias preguntas obvias. ¿De dónde surgieron estos excluidos que se involucraron en el conflicto? ¿Bajo qué lógicas y motivaciones fueron reclutados por guerrillas, paramilitares y mafias para hacer la guerra? ¿Se trató solo de una decisión de jóvenes excluidos para resolver su situación individual o había un convencimiento en la causa armada? ¿Hasta qué punto las comunidades estuvieron comprometidas ideológicamente con la insurgencia y la contrainsurgencia, en el sentido que

4 Información obtenida del portal del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

5 La relación tiene en realidad una forma de U invertida. Cuando existe control autoritario de un grupo armado irregular la violencia es baja; cuando hay disputa, la violencia aumenta; y cuando el Estado controla, vuelve a reducirse. Ver Duncan (2004).

colaboraban con la causa de los grupos armado como un mecanismo de solución de los problemas de exclusión de un grupo social y no como resultado de una imposición o por pura conveniencia individual?

La evidencia muestra que a mediados de los ochenta el conflicto en el país estaba centrado en dos tipos de enfrentamientos. Por un lado entre guerrillas y las fuerzas de seguridad del Estado en conjunción con diversos grupos paramilitares. Era el resultado del avance de la guerrilla hacia las áreas integradas luego de casi dos décadas de incubación suficiente fuerza en geografías remotas (Aguilera, 2013; Rangel, 1998). Si bien el objetivo final era la toma del poder nacional, para lo cual era necesario ingresar en Bogotá, el avance en el territorio estaba limitado por la capacidad militar de las guerrillas. Fueron las áreas rurales circundantes a las ciudades y municipios medianos y pequeños donde tuvo lugar la mayor parte de esta guerra. Por otro lado estaba el conflicto de los narcotraficantes contra el Estado, en particular de Pablo Escobar. El caso de los narcotraficantes es importante porque si bien Escobar fue dado de baja en 1993, los narcotraficantes fueron progresivamente tomándose el control de los grupos paramilitares y convirtiéndose en un actor decisivo en el conflicto y la política nacional. Estos enfrentamientos estuvieron localizados en un principio en las grandes ciudades, principalmente Medellín, pero luego se expandieron hacia zonas rurales y municipios intermedios donde los narcotraficantes encontraban refugio y debían enfrentarse a las guerrillas que se expandían hacia las áreas integradas del país.

Al margen del lugar geográfico concreto donde ocurrieron estos enfrentamientos, es posible clasificar en dos grandes categorías el origen social de los combatientes, así como el papel que jugó la exclusión como causa de su vinculación al conflicto. En las zonas de colonización agraria, desde los llanos y las selvas del suroriente hasta el Urabá, unas guerrillas dirigidas o formadas por partidos de izquierda urbanos se convirtieron en una alternativa para el descontento de jóvenes campesinos. La miseria, el resentimiento, el maltrato en sus hogares, el deseo de conocer otros lugares, la necesidad de protegerse y otras razones personales fueron más contundentes que cualquier convencimiento ideológico. Si algún testimonio da una idea de este resentimiento son las narraciones de los secuestrados sobre la manera como los guerrilleros rasos les recriminaban cuando se quejaban de su situación. En el desgarrador testimonio de Guillermo ‘La Chiva’ Cortés durante su secuestro, por ejemplo, un guerrillero le respondió así cuando se quejó de que iba a tener que dormir en el barro: “¿Cómo cree que nos parió mi mamá a mí y a mi hermano? Pues entre el barro, viejo hijueputa. En cambio a usted lo parieron en una clínica de la burguesía –escupió las palabras con el odio más sincero y profundo”⁶.

6 Alexandra Samper, “El secuestro de la Chiva. Un testimonio sobre los 205 días del rapto de Guillermo Cortés”. *Malpensante*, julio de 2013 Disponible en: http://elmalpensante.com/articulo/3117/el_secuestro_de_la_chiva.

Sin embargo, la dirigencia guerrillera en su mayor parte no ingresó al conflicto como consecuencia de la exclusión. Su origen y su formación no eran precisamente de sectores marginales. Fueron más bien sectores medios, o no particularmente pobres, el origen de la mayor parte de la dirigencia guerrillera. Teniendo en cuenta que las guerrillas tuvieron su origen en la dirigencia de partidos políticos de izquierda y en movimientos universitarios (Pizarro, 1996), un mínimo de formación y educación eran necesarios para ingresar en el cuerpo dirigente de la organización⁷. Existieron, por supuesto variaciones de acuerdo a cada caso. Las FARC tuvieron un sector dirigente de origen campesino en sus inicios por tener un vínculo más cercano a las guerras rurales de la violencia clásica. El ELN, por su parte, tuvo una fuerte influencia de la Iglesia y el EPL era maoísta. Pero sea cual fuere el grupo guerrillero en cuestión, en general se impuso una lógica dictada por el gran proyecto revolucionario de la Unión Soviética que Hobsbawm señaló como una de las tres vertientes ideológicas en que se debatió el “corto siglo XX”⁸. A grandes rasgos, la lógica soviética de la revolución le inyectó tres aspectos fundamentales a la trayectoria de las guerrillas. En primer lugar, en la imposición de una vanguardia y una élite que debía encargarse de organizar y dirigir la toma del poder mediante una revolución. La guerrilla como organización política debía estar formada por profesionales revolucionarios que se especializarían en dicha tarea. La población y los cuadros menos formados se acogían a las directrices de la élite revolucionaria. Se daba por sentado que las comunidades colonas no tenían la capacidad de organizar por sí mismas la revolución y debían confiar a la vanguardia revolucionaria la transformación política. Por consiguiente, se trataba de organizaciones con un mando jerarquizado y sumamente centralizado en que las órdenes emanaban de arriba hacia abajo sin mayores cuestionamientos⁹.

En segundo lugar, en una enorme desconfianza hacia los moderados. Al igual que la jefatura soviética en su momento, las FARC y las demás guerrillas veían en las tendencias socialdemócratas de la izquierda los peores enemigos de la revolución. De hecho no era posible dividir a los líderes de la guerrilla en líneas blandas y duras. Podía haber diferencias en muchos aspectos, pero todas giraban en posiciones bastante extremas. Cualquiera que mostrara matices en sus posiciones más radicales era considerado “revisionista”. Y en tercer lugar, en la imposición de una doctrina política hiperrealista. El convencimiento ideológico se daba por descontado, lo importante era obtener los medios materiales milita-

7 Pizarro (1996:24) señala que el grueso de la dirigencia guerrillera, proveniente de los grupos foquistas, provino de las capas medias de la población.

8 La influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética en la formación y organización de los movimientos de izquierda en Colombia está muy bien documentada en los textos de Meschkat y Rojas (2009) y Delgado (2007).

9 Una excepción fue quizá el ELN en sus principios, por los celos internos de la organización (Rangel, 1998).

res y organizativos para hacer la revolución. Cualquier concesión del o al enemigo era vista como una muestra de debilidad que tenía que ser aprovechada en la consecución de los objetivos estratégicos. Una semblanza sobre Jacobo Arenas escrita por miembros de las FARC en internet trasluce los anteriores elementos:

Es en este Congreso Comunista donde se formula por vez primera la línea táctica de combinación de las distintas formas de acción de masas y el papel fundamental de la vía armada en la lucha por un nuevo poder en Colombia, de la que el comandante Arenas no se apartará jamás y desde la cual hará la lucha ideológica contra las tendencias que trataron de socavar la real vocación de poder de todo partido realmente comunista. Esta tenaz labor de Jacobo se extenderá en el tiempo y en el espacio, no solo en la pelea ideológica contra la línea socialdemócrata apoltronada de mucho tiempo atrás en un sector del Partido Comunista Colombiano, sino contra las tendencias eurocomunistas y perestroikas que en mucho influyeron para la fatal desmovilización de las guerrillas de El Salvador y Guatemala, en Centroamérica y del M-19, el EPL y un sector del ELN en nuestra patria.¹⁰

En realidad, más que la exclusión fue el ideal de un cambio político lo que motivó a muchos jóvenes de clases medias y populares a hacer parte de los grupos insurgentes durante los sesenta y setenta. Era parte además de un proceso que tenía lugar a lo largo de toda Latinoamérica. Como lo referencian otros autores en sus ensayos de este mismo informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Jorge Giraldo y Daniel Pécaut), en casi todos los países de la región la nueva ola de izquierda y la Revolución cubana sedujeron a muchos jóvenes a militar en las distintas vertientes de la izquierda, incluyendo por supuesto a la izquierda armada¹¹. En las universidades públicas era común la presencia de fuertes movimientos de izquierda radical¹² y la conformación de redes de reclutamiento para las guerrillas. En términos prácticos, la disponibilidad de unas formas dadas de organización y de marcos ideológicos, es decir de una insurgencia comunista basada en la idea del foquismo cubano o en las concepciones revolucionarias del Partido Comunista soviético, significaba una ventaja estratégica para movilizar a los sectores verdaderamente excluidos. Los costos de inventar una organización insurgente y una ideología para dar forma a la lucha política que campesinos y colonos excluidos iban a adoptar ya estaban internalizados en todo el proceso de expansión ideológica de la izquierda durante esa época. Pero a su vez la

10 En “Breve esbozo biográfico sobre el comandante Jacobo Arenas” de Bernardo Peñalosa, miembro de la Comisión Relaciones Políticas FARC-EP, agosto 10 de 1999. Ver: <http://mbsuroccidentedecolombia.org/inicio/jacobo.html>.

11 Para una recopilación de las distintas insurgencias, ver Wickham-Crowley (1992).

12 Tirado Mejía (2014) ofrece una interesante descripción de la difusión del marxismo en Colombia durante los años sesenta.

adopción de una forma predeterminada de insurgencia y de objetivos políticos maximalistas, ni más ni menos que una revolución, significaba que la solución de los problemas de pobreza, exclusión y marginalidad de quienes conformaban la tropa rasa debía esperar a que el triunfo militar de la insurgencia se materializara. En consecuencia, asuntos prioritarios para los excluidos como una reforma agraria, un alivio de su situación material y, en general, el acceso a los servicios del Estado estaban subordinados a los objetivos políticos de la dirigencia guerrillera.

Por su parte, en unas pocas ciudades y en algunos municipios otro tipo de motivación seducía a los jóvenes excluidos. No era la miseria que se experimentaba en el más remoto aislamiento. Era, por el contrario, la miseria que se sentía cuando se vivía cerca de la opulencia. Muchos jóvenes apostaron por la delincuencia simplemente para aliviar su frustración de “ser tan poca cosa”. No había un discurso sofisticado detrás, bastaba el lema de “si no hay oportunidades por las buenas, nos las arreglamos por las malas”. Aparecieron así en muchas ciudades subculturas criminales entre jóvenes de barrios populares y comunidades marginales que apenas hacían el tránsito hacia la vida urbana. Las subculturas criminales (Cloward y Ohlin, 1960) son un sistema de normas, valores y comportamientos propios de jóvenes pertenecientes a comunidades excluidas en que alguna modalidad criminal se convierte en un medio de realización social. Estas subculturas constituyen un desafío a las instituciones del Estado porque son vistas como ilegítimas por los jóvenes marginales ya que de entrada suponen una negación a sus posibilidades de éxito en la sociedad. En consecuencia, algunas prácticas criminales son adoptadas como mecanismos alternos de realización y de alivio ante la situación de exclusión.

Pero la reacción en forma de subculturas criminales que abundó en las ciudades colombianas no hubiera supuesto mayor problema en términos del conflicto si no hubiera sido por el papel que tuvo el narcotráfico en la canalización del descontento de ciertos jóvenes hacia una situación de violencia más compleja. De haber sido así, el problema de la subcultura se hubiera circunscrito al tema de pandillas y bandas dedicadas a atracos, vandalismo y robos de menor sofisticación, no al de organizaciones armadas que en un momento dado se enfrentaron al Estado bajo el liderazgo de Pablo Escobar y que luego se convirtieron en un recurso importante para el control del narcotráfico y la organización de la contra-insurgencia privada. Estos jóvenes fueron el aparato de guerra del Cartel de Medellín y de los paramilitares de Castaño, que no eran nada distinto a una facción disidente del Cartel de Medellín que abatió a Escobar. Las grandes organizaciones narcotraficantes y paramilitares proveyeron a las subculturas criminales con suficiente disciplina, recursos, habilidades y aprendizaje organizacional para acceder a enormes flujos de riqueza y al ejercicio del poder sobre numerosas comunidades. Con el narcotráfico se abrió entonces para sectores excluidos una nueva perspectiva que moldeó sus comportamientos en las siguientes décadas. Como lo describió un narcotraficante entrevistado por Guillén (2003:159):

A comienzos de los años setenta la ciudad de Cali –y creo que puede decirse toda Colombia– estaba predispuesta a convertirse en el paraíso de la cocaína, el mejor negocio del mundo. A primera vista no resulta fácil entender por qué, pero lo es [sic]. La clase baja urbana, a la que yo pertenezco, no solamente tenía educación escolar sino que era mucho más pujante que en cualquier otra parte de América Latina. Los colombianos pobres luchamos hasta la muerte para dejar de serlo; no esperamos las oportunidades de la vida sino que las buscamos, inclusive nos las inventamos, a las buenas o a las malas. No creo haber visto, en ningún lugar del mundo, gente más trabajadora e imaginativa para ganarse la vida. En Colombia no hay oportunidades de progreso para los necesitados, que somos mayoría.

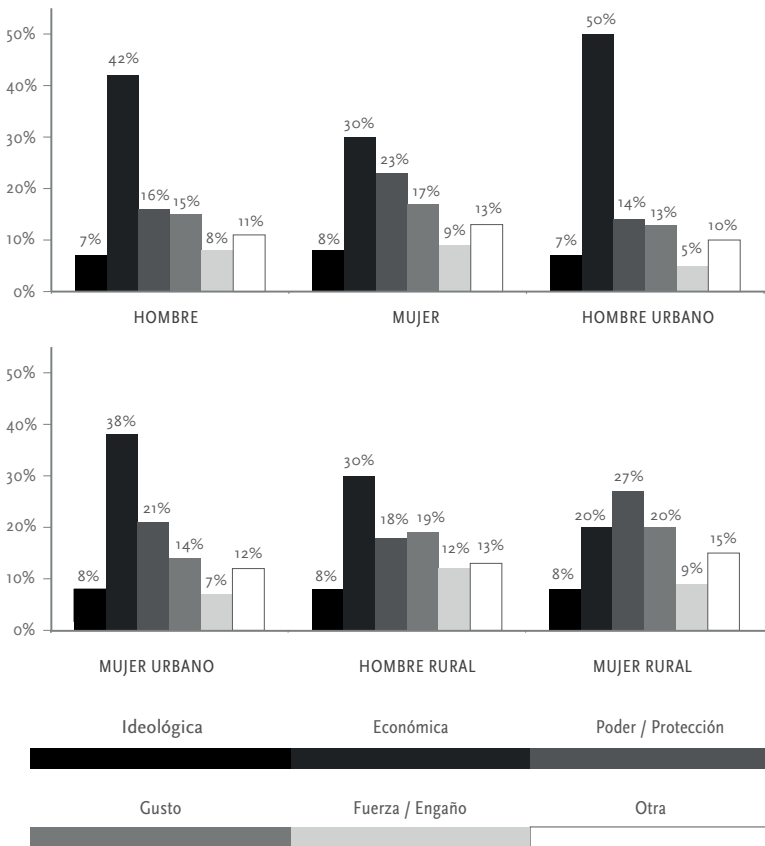
A diferencia de las guerrillas, las organizaciones narcotraficantes ofrecían oportunidades de mando a individuos provenientes de sectores excluidos, en particular si estos individuos controlaban la organización de la violencia. No se necesitaban estudios universitarios ni preparación en alguna retórica ideológica. Bastaban las habilidades adquiridas en la propia carrera criminal para dirigir una organización que se imponía como reguladora de la producción y el del tráfico de drogas en algún territorio y, más importante para efectos del conflicto, en la organización que regulaba el orden social de dicho territorio. Eventualmente si otras organizaciones criminales o las guerrillas pretendían disputar su control territorial el conflicto involucraba a la población. Una guerra que en principio debía ser estrictamente entre delincuentes por controlar un mercado ilegal se había convertido en una guerra por controlar sociedades.

Sin embargo, hasta principios de los ochenta el involucramiento de miembros de sociedades excluidas en las guerrillas y en los ejércitos privados del narcotráfico era muy reducido. Las guerrillas controlaban unas cuantas zonas de colonización campesina y, salvo algunos vecindarios marginales en la región antioqueña y otras áreas rurales del país, las mafias era poco lo que controlaban. Fue solo cuando las guerrillas incursionaron a las áreas integradas del país que el conflicto involucró a un gran número de excluidos en muchas regiones de Colombia. Nuevos guerrilleros rasos fueron reclutados a medida que la insurgencia incursionaba hacia regiones más integradas. El Ejército y la Policía crecieron varias veces su número inicial y los narcotraficantes incrementaron progresivamente el tamaño de sus propios ejércitos privados. Había que defenderse del riesgo de secuestro y de expropiación que implicaba la llegada de la guerrilla a los extramuros de las zonas integradas del país.

El avance territorial de la guerrilla no fue en todo caso un proceso de concientización de excluidos como clase social. Los excluidos fueron reclutados como tropa rasa de las distintas organizaciones, guerrillas y paramilitares, por motivos en su mayor parte distintos a la reivindicación de un sector de la sociedad o al convencimiento en los ideales de la organización, cualesquiera que ellos fueran. Las ansias de venganza personal, el salario en el grupo armado en relación a las oportunidades laborales disponibles en la legalidad, el reclutamiento forzado, la falta de otro

tipo de oportunidades y, sobre todo, la necesidad de protegerse y adquirir estatus empujaron a muchos jóvenes a hacer parte de algún grupo en disputa. Los resultados de las encuestas a desmovilizados realizados por la FIP muestra que los motivos ideológicos no pasan del 8% (ver Gráfico 2.1). Las carencias económicas y la búsqueda de poder y protección, es decir motivaciones individuales, son mucho más importantes¹³. Igual sucedió con muchas comunidades que terminaron colaborando con algunas de las partes, fuera Estado, paramilitar o guerrilla. No lo hacían por un convencimiento en sus posibilidades de resolver sus problemas de exclusión sino por acceder a algún tipo de protección en un contexto altamente violento.

GRÁFICO 2.1. ENCUESTA FIP A DESMOVILIZADOS.
¿MOTIVOS PARA INGRESAR AL GRUPO ARMADO?



Fuente: Tomado de Rubio (2013).

13 La venganza como motivo está contenida en la respuesta poder/protección y es alta como motivo tanto en hombres como en mujeres.

De hecho, a medida que guerrillas y paramilitares coparon las áreas periféricas del país, e incluso las zonas marginales de las ciudades, la exclusión de los servicios de seguridad se convirtió en la forma de exclusión más apremiante. El problema de resolver la situación material tuvo que ceder ante las necesidades de preservar la vida y la propiedad por escasa que esta fuera. Las comunidades quedaron atrapadas bajo la lógica de apoyar a la guerrilla o a los paramilitares como una decisión para garantizar su supervivencia. Si cualquiera sospechaba de ellos como auxiliares del enemigo iban a ser masacrados. Había que apostar por la colaboración con la facción que ofreciera la protección más confiable. La lógica de la violencia en las guerras civiles argumentada por Kalyvas (2006) se expresaba en su versión clásica de enfrentamientos entre el Estado, paramilitares y guerrillas, pero también entre organizaciones criminales que competían por controlar territorios.

A grandes rasgos lo anterior señala que la exclusión material, debido al papel jugado por otras variables, fue solo importante como motivación para la insurrección violenta contra el Estado en circunstancias muy concretas y entre muy pocos sectores sociales. Se trató de una condición a lo sumo necesaria pero no suficiente para que guerrillas, paramilitares y narcotraficantes pudieran reclutar a un sector de su tropa rasa. Luego, cuando la violencia se difundió hacia numerosos espacios geográficos, la exclusión como motivación para el conflicto fue rebasada por otras variables. La necesidad de hacer parte de un grupo armado para defenderse a sí mismo y a su comunidad, o para acceder a algún tipo de orden, fueron motivos más poderosos para que el conflicto se extendiera a lo largo de la geografía colombiana. En ese momento el tipo de exclusión importante como causa del conflicto fue la exclusión de los servicios de seguridad y de justicia del Estado. Muchos excluidos terminaron en la guerra como un medio para asegurar protección y reclamar venganza por agravios sufridos previamente. Tanto guerrillas como paramilitares sacaron provecho de la incapacidad en ese aspecto de las instituciones del Estado.

Lo anterior también apunta a que otro tipo de variables fueron más importantes para perfilar la forma que tomó el conflicto que la exclusión material. Entre estas variables estaban dos prácticas criminales, el secuestro y el narcotráfico, que repercutieron tanto en la generación de recursos concretos para hacer la guerra como en la creación de un entorno de inseguridad en que las demandas por protección y orden se convirtieron en motivaciones apremiantes para colaborar con las distintas partes del conflicto. Fue así que los grupos armados irregulares aprovecharon la oportunidad ofrecida por la criminalidad y ajustaron sus medios de guerra y de control social para favorecer su situación. Más aún, encontraron que con las rentas de la criminalidad podían mantenerse en el conflicto de manera indefinida.

EL SECUESTRO

Durante más de una década las guerrillas permanecieron en un estado de cuasi-hibernación en la periferia, durante el cual acumularon los hombres y los recursos para proyectarse militarmente hacia áreas más integradas al centro político y económico del país. Los avances, sin embargo, fueron bastante limitados. Ni el pie de fuerza ni el armamento disponible permitían a las distintas guerrillas enfrentar en combates abiertos y en guerras de movimiento a los aparatos de seguridad del establecimiento. A lo largo de la década de los ochenta lo máximo a lo que podían aspirar era a llevar a cabo acciones propias de guerra de guerrillas. Las emboscadas, la toma de municipios y veredas remotas, la concentración de tropas para lanzar un ataque y luego su dispersión, los actos de sabotaje y eventualmente alguna acción audaz, como toma de la embajada de República Dominicana y el Palacio de Justicia realizadas por el M-19, constituían el grueso del repertorio militar de las guerrillas.

Podría parecer que con tantas limitaciones para escalar la guerra la amenaza insurgente en Colombia era un asunto más bien simbólico, sobre todo si se compara con la capacidad que tuvo durante esos mismos años el Cartel de Medellín de aterrorizar a las élites nacionales y de replantear la agenda política alrededor de la no extradición (Lemaitre, 2011). Sin embargo, otro tipo de amenaza real al orden establecido se incubaba alrededor de los procesos de expansión territorial de las guerrillas. Aunque no pudieran doblegar al Ejército en combates regulares y cuestionar su control territorial sobre la cabecera de las ciudades y municipios más importantes del país, su estrategia le permitía acumular recursos en áreas más ricas que aquellas donde originariamente habían formado su ejército. De paso la acumulación de recursos en estas nuevas áreas se convirtió en una amenaza concreta contra las élites de periferia.

La estrategia de la guerrilla consistía en copar en las zonas rurales que circundaban a las ciudades intermedias y a los municipios más grandes del país. Poco a poco iban creando redes de colaboradores entre las comunidades rurales del área. Cualquier descontento era aprovechado en un principio para ingresar en la zona. Luego, a través de milicianos o de guerrilleros vestidos de civil, controlaban la comunidad para desde allí lanzar operaciones contra las cabeceras urbanas. En los municipios y áreas de baja concentración de tropas y de policías estas operaciones incluían eventualmente tomas y combates contra la fuerza pública. Los puestos de policía eran volados en pedazos, la sede del Banco Agrario era saqueada y las oficinas del Estado destruidas. Pero el tipo de operaciones que mayor reacción y daño causó entre la población de las áreas periféricas que eran cercadas por la guerrilla fue la explotación sistemática de toda la estructura productiva.

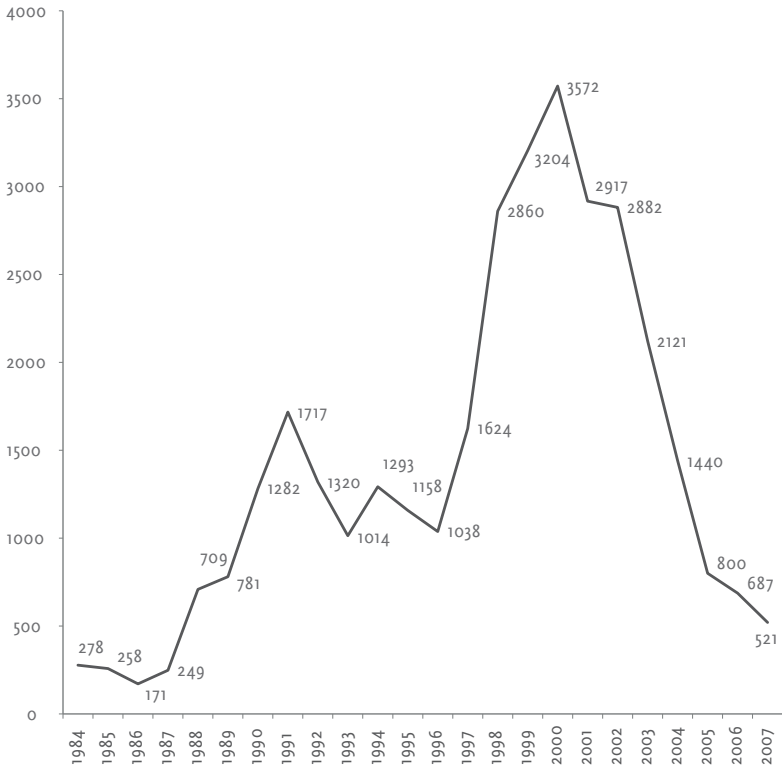
Si en las remotas zonas de retaguardia estratégica la guerrilla utilizó la extorsión a niveles racionales, de modo que no pusieran en riesgo la producción local, en las ciudades y municipios intermedios que

constituían los límites de su expansión territorial la explotación fue irracional. La lógica de la incursión guerrillera no estaba sujeta a la formación de un sistema de gobierno temporal. No solo la extracción de recursos era desorbitada, destruyendo la base productiva disponible en la localidad, sino que no ofrecían otros servicios como protección y justicia que legitimaran su dominación. Mientras en algunas de sus zonas de retaguardia ganaderos y terratenientes podían encontrar rentable el pago de extorsiones periódicas si la guerrilla mantenía la zona libre de abigeos y cuatrerros (Aguilera, 2013), en las zonas de expansión el objetivo era acumular recursos rápidamente para escalar la guerra en su propósito de toma del poder nacional. Desde las zonas rurales secuestraban y extorsionaban sin considerar que la explotación de la producción local llegara a niveles prohibitivos para los agentes económicos. El objetivo inmediato no era gobernar estas sociedades sino acumular recursos para llevar a cabo una revolución. En los debates internos es notoria la discusión entre los apremios por resolver las demandas del gobierno local y las exigencias de la revolución nacional (ver Aguilera, 2013, y las entrevistas a Mario Agudelo por Jaramillo Panesso, 2005).

De todas las formas de explotación que las guerrillas utilizaron en la estrategia de avance hacia las áreas pobladas e integradas a la economía nacional, el secuestro tendría los mayores efectos en la definición y en la evolución del conflicto. No era una práctica criminal nueva. Rubio (2003) y el Observatorio de Derechos Humanos y DIH (2009) documentan sus inicios mucho antes del conflicto actual, incluso se remontan a la violencia clásica. Así mismo, es bastante probable que Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela hubieran incurrido en esta práctica. La diferencia estuvo en las ventajas operativas que tenían los ejércitos guerrilleros para llevar a cabo secuestros a lo largo de la geografía nacional. Por disponer de redes de colaboradores, las guerrillas tenían mayor información sobre potenciales víctimas que no ofrecieran menores riesgos en el proceso de retención. Disponían de extensos lugares de refugio donde mantener secuestrados minimizando el riesgo de las operaciones de rescate y de retaliaciones de la fuerza pública. Las estadísticas revelan que a mediados de los ochenta se convirtió en una práctica extendida a lo largo del territorio nacional (ver Gráfico 2.2). De 278 secuestros por año en 1984 se pasó a 1.717 en 1991. Posteriormente la situación fue aún más crítica cuando las FARC adoptaron las “pescas milagrosas” como estrategia de financiación. Cualquiera que estuviera en el lugar equivocado, una carretera o algún lugar cercano a la presencia territorial de la guerrilla, corría el riesgo de ser raptado en un retén de la insurgencia. Los secuestros alcanzaron la cifra de 3.572 en 2000.

Aunque los efectos más dramáticos del secuestro se vieron entrada la década de los ochenta y en las dos décadas siguientes, la decisión sobre el uso masivo de esta práctica fue bastante anterior. Desde mediados de los setenta en el Partido Comunista (PC) la discusión no era solo sobre si acoger la combinación de las formas de lucha. La discusión

GRÁFICO 2.2. SECUESTROS ANUALES (1984-2007)



Fuente: Policía Nacional y Fondelibertad. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH.

era también si dentro del repertorio de la lucha armada y de mecanismos de financiación de la insurgencia había lugar para prácticas como el secuestro. El debate lo ganó la línea dura del partido. En ese entonces la dirigencia comunista no imaginó la reacción que generaría. La necesidad de financiar la construcción de un ejército revolucionario se impuso sobre cualquier consideración humanitaria o sobre cualquier temor respecto a las retaliaciones que se derivaran de su uso masivo. Igual sucedió con otros grupos guerrilleros que adoptaron el secuestro como mecanismo de financiación (ver, por ejemplo, la autobiografía de León Valencia, 2008).

El secuestro fue definitivo en perfilar la trayectoria del conflicto por sus consecuencias en dos asuntos centrales. En primer lugar, se suponía que era tan solo un medio de acumulación de recursos para disponer de tropas y armas suficientes para derrotar al establecimiento. En la práctica, como se ha mencionado, las probabilidades de desafiar militarmente al Estado eran nulas por lo que el secuestro se convirtió

en sí en un recurso permanente al que podían apelar las guerrillas para mantenerse en el conflicto y para asegurar sus conquistas territoriales. En cierto momento se convirtió en un resultado mismo de la guerra por el daño que causaba entre ciertos sectores sociales de la periferia, en particular a élites legales e ilegales. En las zonas urbanas y semiurbanas más vulnerables la cuestión central era cómo hacían las élites y las clases medias para evitar ser raptados. Allí, así las guerrillas no tuvieran cómo amenazar la superioridad de las fuerzas de seguridad del Estado, habían alterado la capacidad del establecimiento de mantener el orden local. A diferencia de las élites económicas y políticas del centro, que solo en mucha menor escala sufrieron el secuestro en carne propia, sus fuentes de riqueza material se iban extinguiendo progresivamente por la amenaza guerrillera. Es decir, mientras que para el centro el propósito de la guerra era cómo evitar que la guerrilla lograra escalar la guerra a un punto que el control de la situación por el Estado estuviera en juego —algo que las fuerzas de seguridad lograron a lo largo de tres décadas de conflicto—, para la periferia el asunto era cómo evitar que el secuestro destruyera las bases del orden establecido —algo que en cambio era un objetivo militar viable para la guerrilla a través del secuestro y otras prácticas—.

El secuestro era distinto a la extorsión porque afectaba más a la propiedad que a los ingresos. Mientras que la extorsión significaba una reducción de las ganancias de los negocios de los empresarios y propietarios de tierra, o en algunos casos un aumento de precios a los consumidores para pagar las exigencias de la guerrilla, el secuestro involucraba montos muy superiores. Las víctimas se veían obligadas a vender sus propiedades y sus empresas para poder pagar los rescates. En muchos casos los negocios se iban a pique porque el secuestrado era indispensable para una administración eficiente. La duración de los secuestros en ocasiones alcanzaba hasta más de un año. En el caso de los secuestrados políticos sucedieron situaciones aberrantes de más de una década de cautiverio. Muchos profesionales, gerentes de empresas y agricultores vieron cómo las empresas de toda una vida eran liquidadas porque las condiciones de seguridad las hacían inviables.

El daño a la capacidad productiva de las economías locales por el secuestro también afectó a sectores excluidos de la periferia. Podía ser que las principales víctimas fueran empresarios de sectores muy rezagados, basados en muchos casos en actividades agrícolas de baja productividad y escasa demanda laboral como la ganadería extensiva, pero precisamente por su rezago cualquier imprevisto económico amenazaba los niveles básicos de subsistencia de los campesinos. Si los propietarios de las fincas y cultivos se marchaban del lugar, se acababan las pocas fuentes de capital existentes. En vez de contribuir a aliviar la exclusión material de los campesinos, el uso masivo del secuestro empeoró sus condiciones de vida. Así algunas guerrillas se preocuparon por reivindicar ante terratenientes y ganaderos el derecho a la tierra y a jornales justos de los campesinos, estas reivindicaciones no

compensaban el deterioro de las condiciones económicas de los productores agrarios de periferia¹⁴.

En segundo lugar, el secuestro definió las alianzas políticas entre determinados sectores sociales de la periferia contra la guerrilla y la izquierda legal que de una manera u otra era vinculada a la lucha armada. El secuestro no fue una práctica que azotara de manera homogénea a las élites. La capacidad militar de la guerrilla estaba concentrada en zonas periféricas, por lo que las élites agrícolas y ganaderas fueron las más afectadas. Las élites económicas y políticas de Bogotá nunca sufrieron con la misma intensidad la amenaza de secuestro como la experimentaron sus contrapartes regionales. De igual modo, los narcotraficantes, como un nuevo poder económico de las regiones, se convirtieron en una presa natural. No sería de sorprender que terratenientes, políticos y narcotraficantes se unieran en torno al paramilitarismo en una vendetta sangrienta contra cualquier sospechoso de colaborar con la guerrilla. Había motivos adicionales a los económicos para que en la retaliación llegaran a extremos de crueldad.

El secuestro además de arruinar las frágiles y poco desarrolladas economías legales en las regiones, era una forma humillante de despojar a las élites y a sectores medios de su propiedad. Los secuestrados eran mantenidos en condiciones precarias, bajo la amenaza constante de ser asesinados si las autoridades estatales llevaban a cabo un plan de rescate. Las negociaciones del monto del rescate se realizaban en una situación de absoluta impotencia. Los familiares debían soportar la indolencia de los negociadores de la guerrilla. En muchas ocasiones, sobre todo luego de que se popularizan las “pescas milagrosas”, los negociadores de las guerrillas pedían cifras absurdas y abandonaban los canales de comunicación durante períodos de tiempo prolongados dejando a los familiares de las víctimas en la más absoluta incertidumbre acerca de si todavía estaban vivos. Los relatos periodísticos de los casos son desgarradores.

Así como muchos empresarios, terratenientes, comerciantes y ganaderos malvendieron lo que tenían y migraron a las ciudades espantados por los riesgos a su propiedad y a su propia seguridad física, otros optaron por organizar ejércitos privados para defenderse. En las regiones colombianas, a pesar de la larga experiencia democrática, existía una fuerte tradición del uso de la violencia privada tanto para imponer los derechos de propiedad como para asegurar el control político de la zona (Gutiérrez Sanín, 2014). Pécaut (2001) se refiere a un período de violencia larvada durante las casi dos décadas posteriores a la violencia clásica en el sentido que la violencia privada era un mecanismo de regulación de la vida social en numerosas comunidades. No fue difícil que esta tradición de violencia se reactivara cuando las guerrillas se expandieron a nuevas áreas.

14 Diversos estudios refieren cómo el avance de las guerrillas destruyó las economías regionales que dependían de la ganadería y la agricultura. Ver Bernal (2004) y Bejarano y otros (1997).

Muchas élites legales contrataron a antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y a campesinos del lugar para afrontar las amenazas de secuestro y expropiación por parte de las guerrillas. El Ejército y la Policía, por su parte, contribuyeron con la tarea de organizar una contrainsurgencia privada. Eran los tiempos de la Guerra Fría y sobre sus hombros reposaba la lucha contrainsurgente. En ese entonces era legal que el Ejército colombiano armara grupos de autodefensa entre la población civil¹⁵ para contrarrestar la amenaza comunista. En realidad, se trataba de la aplicación de estrategias de guerra contrainsurgente elaboradas por la doctrina militar de Estados Unidos en un contexto de proliferación de guerrillas a lo largo de América Latina (Ramsey, 1981). Los componentes básicos de esta doctrina rápidamente quedaron obsoletos cuando el conflicto colombiano introdujo nuevos elementos como el secuestro y el narcotráfico, y las guerrillas demostraron una capacidad única de expansión y resistencia entre los países de América del Sur.

La contrainsurgencia privada no fue solo un asunto de sectores de élite y clases acomodadas en conjunción con los aparatos de seguridad del Estado. Muchas comunidades campesinas, incluyendo sectores bastante excluidos de la población, tomaron partido contra la guerrilla. Aunque en su caso no fue el secuestro lo que motivó su participación en el conflicto, existieron otros motivos poderosos para tomar las armas. Por un lado, las guerrillas exigían recursos para sostener la logística de la guerra y reclamaban el reclutamiento de un hijo para la causa. Y por otro lado, cuando la guerra se extendió a lo largo del territorio era necesario colaborar con algún bando. No había espacio para la neutralidad. Por su situación geográfica, su dependencia económica, su desconfianza con las guerrillas o simplemente por la pura imposición a la fuerza, muchas comunidades colaboraron con el dominio local de ejércitos privados contrainsurgentes. Un caso interesante es el de Adán Rojas, un campesino al que ‘Tirofijo’ mató a su padre durante la violencia clásica por no darle una panela cuando él era apenas un adolescente. Para huir de la violencia migró a la Sierra Nevada para cultivar café. A finales de los setenta las FARC se tomaron Palmor, su pueblo. Cansado de pagar extorsiones y reacio a ceder sus hijos al ejército guerrillero se armó. Creó un grupo paramilitar con su consiguiente legado de muertes, masacres y desplazamientos¹⁶.

De hecho, cuando el conflicto se extendió a lo largo del país e involucró a las más diversas comunidades, las cuales se vieron obligadas a apelar a uno u otro bando para protegerse del secuestro y demás secuelas de la violencia, fue que se hizo evidente una de las formas de exclusión más críticas en Colombia, la de los servicios de seguridad y justi-

15 El decreto 3398 de 1965 amparaba la organización de autodefensas civiles por las fuerzas militares.

16 En el Portal de Verdad Abierta (www.verdadabierta.com) está bastante documentado este caso con entrevistas al propio Adán Rojas.

cia por las instituciones del Estado. Mientras ciertos sectores sociales gozaban de la protección de la fuerza pública y podían apelar a los tribunales del Estado para resolver sus problemas legales, otros, por el contrario, debían proveerse estos servicios con las organizaciones armadas que contralaban el territorio¹⁷. Si bien la organización de la contrainsurgencia privada estuvo motivada en un principio por la necesidad de defenderse ante los avances de las guerrillas, en particular para neutralizar el riesgo del secuestro, en una etapa posterior estas organizaciones aprovecharon su capacidad coercitiva para imponer unas condiciones de protección y de justicia ajustadas a sus intereses. En la práctica, la organización de la coerción privada se convirtió en sí mismo en medio de poder, ahora no solo para enfrentar las amenazas de la insurgencia sino también para reclamar la imposición de una forma particular de autoridad en la periferia. El asunto pasó entonces a otro umbral, el de la apropiación de las funciones de autoridad local.

Y de todos los sectores que organizaron la contrainsurgencia privada a principios y mediados de los ochenta, quienes más aprovecharon la nueva situación para imponer sus medios de dominación en lo local fueron los narcotraficantes. Era apenas normal que los narcotraficantes, como los nuevos magnates regionales, se convirtieran en las principales víctimas de las guerrillas. Si algún sector contaba con dinero en las zonas donde las guerrillas tenían suficiente poder territorial para secuestrar eran precisamente ellos. La diferencia era que los narcotraficantes, como curtidos delincuentes, estaban dispuestos a dar la pelea como ninguna otra élite y contaban con los recursos para darla. Su reacción fue tan contundente y tan sangrienta que a finales de los noventa pasaron de ser un mecanismo de contención de la guerrilla a convertirse en una fuerza en expansión con aspiraciones de autoridad territorial.

Se suele atribuir el origen del enfrentamiento entre los narcotraficantes y la guerrilla a la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por el Cartel de Medellín luego que una hermana de los Ochoa fuera raptada en noviembre de 1981. En realidad desde antes de secuestrarla, la guerrilla ya secuestraba y extorsionaba a narcotraficantes y a sus familiares. El caso más emblemático por sus consecuencias futuras, el del padre de los hermanos Castaño, ocurrió justo antes de la conformación del MAS. Según Ronderos (2014), Jesús Castaño fue plagiado en su finca en septiembre de 1981. Los Castaño desde entonces habían comenzado una cadena de retaliaciones y asesinatos selectivos en la región. Más aún, el MAS se disolvió tan pronto como fue devuelta la hermana de los Ochoa. Después del episodio Escobar selló un acuerdo con el M-19 en que no secuestraban narcotraficantes ni disputaban el

17 García Villegas (2008) demostró empíricamente a lo largo de los municipios de Colombia que los casos atendidos por la justicia estatal eran los más insignificantes, mientras que los grupos armados irregulares se encargaban de definir los casos duros de derechos de propiedad y temas que en lo legal harían parte de la justicia penal.

control de la ciudad a cambio de pagos recurrentes. Una prueba del acuerdo fue que cuando los hijos del narcotraficante Jader Álvarez fueron secuestrados en Bogotá, el propio Escobar lanzó volantes en la ciudad aclarando que el MAS no tenía nada que ver con las desapariciones de un profesor y varios estudiantes de la Universidad Nacional sospechosos del secuestro¹⁸. Era un mensaje para no arruinar los acuerdos realizados con la guerrilla.

El enfrentamiento entre guerrillas y narcotraficantes fue una consecuencia del choque entre dos proyectos de control social antagónicos que podían llegar a acuerdos siempre y cuando no existiera la competencia territorial. Tanto es así que en un principio no tuvieron problemas para negociar en las áreas más remotas del país, controladas por las FARC, el establecimiento de grandes complejos de producción de cocaína como Villa Coca y Tranquilandia. Allí, el Cartel de Medellín no tenía intereses en cuanto al ejercicio de algún tipo de dominación social, así que no había problemas en pagar a la guerrilla para que brindaran protección frente a las autoridades. Entre los narcotraficantes que operaba en el laboratorio estaba Fidel Castaño, quien en el norte del país llevaba a cabo una guerra a muerte con las FARC y demás guerrillas. El problema se originó solo cuando las guerrillas incursionaron en las regiones donde los narcotraficantes habitaban y comenzaron a secuestrar a diestra y siniestra. Armar poderosos ejércitos privados y aliarse con las élites legales y demás formas de contrainsurgencia en la periferia fue una reacción apenas natural para sobrevivir en medio de un escenario de extrema inseguridad.

La organización del paramilitarismo respondió a las particularidades del desafío militar que la guerrilla representaba a los sectores legales e ilegales amenazados por su expansión. Estos desafíos no estaban dados por el desarrollo de un aparato de guerra capaz de neutralizarlas en combates regulares. La guerrilla no tenía capacidad para llevar a cabo una guerra de movimientos en áreas próximas a las cabeceras urbanas donde habitaban quienes organizaban la contrainsurgencia privada. Era necesario, por el contrario, el desarrollo de pequeños ejércitos que aniquilaran los milicianos, las redes logísticas, los colaboradores y los simpatizantes que permitían a la guerrilla el uso sistemático del secuestro, la extorsión y la infiltración de instituciones como partidos políticos, sindicatos, universidades y administraciones públicas. El objetivo era disponer de un grupo de hombres armados con suficiente capacidad de vigilancia de las comunidades y de retaliación contra cualquier miembro o sector de la comunidad que colaborara con la insurgencia. Hasta antes de que los hermanos Castaños decidieran elevar las apuestas y formar grandes ejércitos contrainsurgentes, bastaban unos

18 En *El Tiempo* (2 de septiembre de 1982, p. 2A) fue referenciado el suceso: "MAS niega asesinato de profesor Alberto Alava desde panfletos lanzados desde una avioneta en Bogotá".

cuantos hombres estratégicamente desplegados en el territorio de modo que cualquier comportamiento anómalo fuera monitoreado y reprimido. Para operaciones especiales como el asesinato de un dirigente o la ejecución de una masacre se utilizaban sicarios profesionales y escuadrones de la muerte¹⁹.

De allí la naturaleza organizativa de los ejércitos paramilitares y el sentido de sus prácticas, desde exterminios políticos hasta masacres. El exterminio de la UP, por ejemplo, estuvo más relacionado a la cadena de retaliaciones locales entre insurgencia y contrainsurgencia privada que a un gran plan dirigido desde Bogotá por las élites económicas y políticas. No hay mayor evidencia que algún presidente o los líderes de los partidos tradicionales²⁰ de la época hubieran estado tras el asesinato de los activistas de la izquierda legal. Es cierto que las élites de Bogotá fueron indolentes con la matanza que se llevaba a cabo, pese a ser un hecho ampliamente divulgado por los medios de comunicación, y que algunos magnicidios contaron con la colaboración de sectores radicales en las fuerzas de seguridad del Estado²¹ y que dentro de la doctrina de la Policía y el Ejército estaba la tolerancia y el trabajo conjunto con grupos paramilitares. Sin embargo, quienes tomaron la decisión de asesinar a los funcionarios, candidatos y militantes de la UP fueron élites y sectores de poder regionales, quienes temían que un avance electoral de este partido condujera a un deterioro de su posición de poder en la periferia, así como a un incremento de los niveles de expropiación de la guerrilla.

La violencia contra las figuras políticas del enemigo, sobre todo si estas aspiraban a cargos de elección popular, era muy efectiva para asegurar el poder en la dinámica regional del conflicto. Los cargos del Estado garantizaban recursos y decisiones institucionales que eran importantes para determinar los resultados de los enfrentamientos entre la insurgencia y la contrainsurgencia privada en una región dada. La victimización de la clase política como estrategia de guerra sucedió igual con los partidos tradicionales. Puede que los militantes de los partidos Liberal y Conservador no hayan sido exterminados como lo fue la UP, pero la cantidad de muertos que han puesto en estas últimas décadas de conflicto fácilmente puede superar a los de la izquierda por pura cantidad de potenciales víctimas. El Cuadro 2.1, a pesar de los problemas de subre-

19 El caso Mejor Esquina relatado por Sánchez Jr. (2003) es dicente de cómo las masacres eran realizadas por grupos especiales reclutados para tal propósito. Así mismo la propia descripción que Carlos Castaño hace del asesinato de Carlos Pizarro muestra cómo funcionaba el sicariato dentro del paramilitarismo.

20 Una excepción quizá podría ser Hernando Duran Dussán, quien al parecer participó activamente en la organización del paramilitarismo en los Llanos Orientales (ver Dudley, 2008, y Gutiérrez Sanín, 2014).

21 Se suele citar, por ejemplo, el papel que tuvo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el asesinato no solo de dirigentes de izquierda sino también de Luis Carlos Galán.

CUADRO 2.1. ASESNINATOS POLÍTICOS (1986-2002)

ACTIVIDAD POLÍTICA	Sin Filiación Registrada	Liberal	UP	Conserv.	Sindicato	Org. Popular	Otra Filiación	Esperanza Paz y Libertad	M-19	Otros
Alcalde	100	31	8	16	0	0	4	0	0	0
Concejales	277	208	50	120	0	2	22	7	5	0
Militantes / Activistas	20	6	159	3	31	11	77	114	13	0
Dirigentes políticos locales	144	87	53	38	0	2	9	4	2	0
Inspector de policía	258	19	1	4	0	0	3	0	0	0
Dirigentes populares	58	5	8	2	2	136	11	0	1	3
Otros funcionarios del Estado	199	11	4	6	0	0	2	0	0	0
Dirigentes sindicales	15	0	7	0	183	2	2	2	0	0
Candidatos Concejo	52	18	5	9	0	0	6	0	2	1

Dirigentes políticos Departamentales	32	34	10	10	0	0	3	0	1	0
Candidatos Alcaldía	38	14	11	5	0	0	7	0	1	0
Diputados - Consejeros	7	19	8	8	0	0	4	0	0	0
Periodistas	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parlamentario	1	8	7	7	1	0	0	0	0	0
Dirigente político nacional	2	6	6	6	1	0	0	0	1	0
Simpatizantes	0	2	0	3	0	0	0	13	2	0
Otros	5	8	2	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1235	476	242	335	218	153	150	140	28	4
PORCENTAJES	41,40%	16,00%	8,10%	11,20%	7,30%	5,10%	5,00%	4,70%	0,90%	0,10%

Fuente: DAS, elaboración de Rodolfo Escobedo.

gistro, muestra que el número de víctimas de los partidos tradicionales además de lo exagerado fue superior a los de la UP.

Las razones del exterminio de la UP estuvieron en que, pese a ser una iniciativa de reinserción a la vida civil en el marco del proceso de paz del gobierno Betancur, se convirtieron en parte de la estrategia de expansión territorial de las FARC, en concreto en el frente político con este propósito. Braulio Herrera e Iván Márquez, actual miembro del secretariado, fueron congresistas por la UP. Y aunque muchos de sus militantes no fueran guerrilleros, incluso algunos no fueran partidarios de la lucha armada, para las élites regionales su entrada en la competencia electoral significaba que aliados de quienes los mataban, secuestraban y expropiaban los iban a despojar del control de las instituciones del Estado local. El propio senador de la UP, Alberto Rojas Puyo, le advirtió a Jacobo Arenas, máximo comandante de las FARC, que si continuaban con el secuestro iban a masacrar al partido. No obstante, en los debates internos en el Partido Comunista, de donde venía el grueso de los militantes de la UP²², fueron derrotados los moderados. La línea radical del partido respaldó el uso del secuestro como parte de la estrategia revolucionaria de toma del poder.

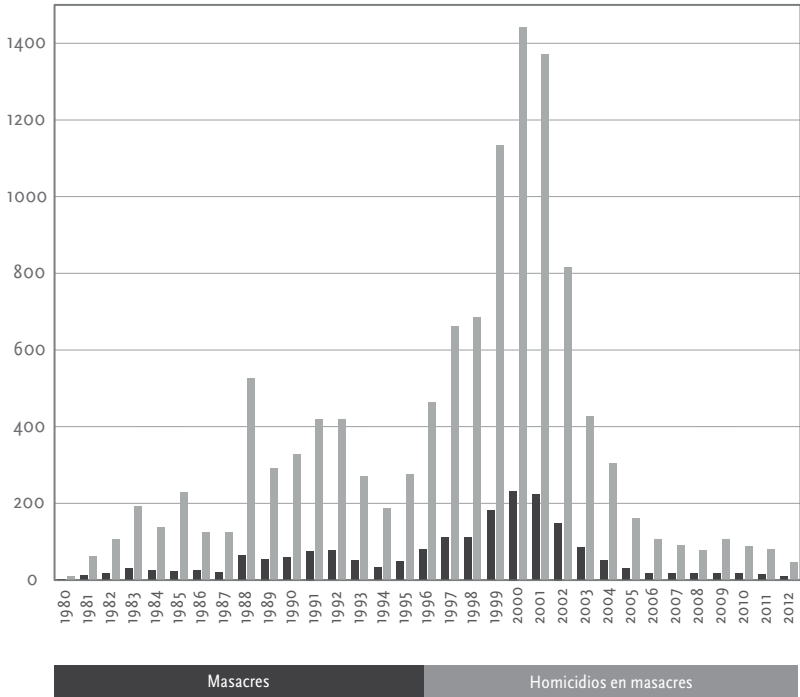
La respuesta de las élites legales e ilegales de las regiones, sobra decir, fue implacable. Más de 3.000 militantes de la UP fueron asesinados. Pero el exterminio no se trató de una conspiración de Estado, ni de la defensa a sangre y fuego de la riqueza por las grandes élites económicas. Tampoco fue el producto de una intolerancia ideológica por sectores tradicionales. La verdad fue más mundana y más sangrienta que eso, fue la respuesta local ante el riesgo de perder elecciones lo que incrementaba las posibilidades de control guerrillero y por consiguiente de sufrir secuestros, extorsiones y demás prácticas expropiativas. Carroll (2011), por ejemplo, explica los asesinatos de los movimientos sociales de izquierda como el resultado de retaliaciones de élites locales, soportadas en muchos casos en autoridades nacionales, donde existía el riesgo de perder su ascendencia electoral.

Otro ejemplo de cómo la organización de la contrainsurgencia privada estuvo marcada por la necesidad estratégica de garantizar que la insurgencia no fuera capaz de llevar a cabo secuestros en las regiones fueron las masacres. Dentro de la lógica de las masacres estaba destruir los soportes sociales de la guerrilla que pudieran servir como plataforma en las áreas circundantes a las ciudades intermedias desde donde lanzar operaciones de secuestro²³. En las veredas y municipios

22 Aguilera (2013) afirma que la UP era vista como el frente político complementario a la estrategia del partido y la guerrilla.

23 Las operaciones de secuestro desde áreas rurales alcanzó incluso a afectar grandes ciudades como Cali, donde secuestraron a más de un centenar de personas en la iglesia La María el 30 de mayo de 1999 y las FARC 12 diputados en otra operación el 11 de abril de 2002. En Neiva, las FARC también asaltaron el edificio Miraflores y raptaron a 15

GRÁFICO 2.3. MASACRES Y HOMICIDIOS POR MASACRES (1980)



Fuente: GMH.

vecinos se organizaban los raptos y luego se mantenían los secuestrados. En casos extremos, las operaciones y el manejo de los secuestrados se hacía a la vista de toda la comunidad. Los civiles incluso se encargaban de cuidar a las víctimas (Castillo, 2014). La consecuencia perversa del involucramiento de la población en el ejercicio del secuestro en particular y de la dominación territorial de la guerrilla en general era que se convertía en objeto de retaliaciones de los grupos paramilitares. Las estadísticas de masacres son escalofriantes como se aprecia en el Gráfico 2.3.

Al final los ataques masivos e indiscriminados contra la población civil se convirtieron en un recurso frecuente dentro del repertorio de guerra de todos los grupos armados, toda vez que su colaboración llegaba a ser definitiva para ejercer control territorial, así como para obtener información sobre las potenciales víctimas de secuestro. Dado que no existía información precisa sobre el grado exacto de involucramiento con la insurgencia de los miembros de las comunidades controladas por la guerrilla, la estrategia paramilitar consistía en sitiar a toda la comunidad y asesinar a cualquier miembro sobre el que cayera la

personas el 26 de julio de 2001.

mínima sospecha de ser colaborador. Muchos inocentes cayeron en las masacres²⁴. En comunidades periféricas, donde la presencia del Ejército y la Policía era precaria o inexistente, la guerrilla también utilizaba la estrategia de asesinatos indiscriminados cuando no tenía información precisa sobre las lealtades y preferencias de la población para evitar posibles desertiones hacia los paramilitares. En otras palabras, mientras el conflicto se expresaba por un lado en combates entre el Ejército y las guerrillas, por el otro se expresaba en retaliaciones de todo tipo contra la población civil para asegurar su colaboración. Y dado que la confrontación estrictamente militar nunca ha tenido un carácter decisorio, es decir la guerrilla no era un rival que amenazara la supremacía del Estado en el campo de batalla pero el Estado tampoco era capaz de eliminarla definitivamente, las retaliaciones contra la población civil se convertían en un verdadero termómetro de los resultados de la guerra. Si la contrainsurgencia podía evitar los secuestros y demás acciones contra su base social, quería decir que iba ganando la guerra y, viceversa, si la insurgencia lograba evitar que las masacres redujeran su capacidad de expansión territorial.

Sin embargo, el análisis de la configuración local de la guerra alrededor del secuestro, las masacres y demás retaliaciones contra la población civil es incompleto si no se consideran los efectos del narcotráfico en la dinámica del conflicto. En cierto momento, muchos de los objetivos y motivaciones iniciales de los actores involucrados cambiaron a medida que se replanteaban sus posibilidades de acuerdo a los resultados de la guerra. El narcotráfico fue crucial para perfilar estos cambios porque generó una economía política que permitía sostener el conflicto de manera indefinida. La guerra, en vez de destruir la riqueza en la periferia, contribuía a generar flujos de capital hacia las regiones al ofrecer protección a un negocio ilegal. Pero fue otro hecho el que llevó a otro nivel la criminalidad en el conflicto: la organización por narcotraficantes de enormes ejércitos privados para convertirse en autoridades de facto en extensas regiones y territorios. El objetivo ya no era solo proteger el capital de las aspiraciones expropiativas de la guerrilla sino también producir capital desde la acumulación de poder, en concreto el poder que significaba ser el gobierno de una importante porción de la periferia del país.

EL NARCOTRÁFICO

El narcotráfico ha tenido hondas repercusiones en el conflicto colombiano por un atributo básico de su proceso productivo: el valor agregado

24 Un ejemplo de lo brutal que podían ser las fallas por información fue la masacre de Barrancabermeja, donde las AUC secuestraron a una treintena de personas en una fiesta y las masacraron pese a que luego se dieron cuenta que solo una pertenecía al ELN (Ronderos, 2014).

se origina, más que en la producción de la droga como mercancía, en la producción de poder como un medio para reducir los riesgos implícitos en el negocio. Es decir, el grueso del valor final del producto está dado por los riesgos que se asumen para llevarlo a los consumidores y por los gastos que se incurren para minimizarlos. Los riesgos son diversos pero sus fuentes más usuales son dos: el Estado y las organizaciones criminales que controlan o aspiran a controlar el negocio. Lo irónico es que estas dos fuentes de riesgo son a su vez los principales medios de protección con que cuentan los narcotraficantes. Es así que: “el ejército privado de un mafioso que protege un corredor de drogas tiene los medios para expropiar la mercancía y asesinar a quienes la transportan. El político que recibe sobornos para evitar que las autoridades persigan a un capo tiene la capacidad de influir sobre las autoridades para producir su captura” (Duncan, 2014).

La razón por la que políticos y criminales pueden ofrecer protección es porque disponen del poder suficiente en una sociedad para garantizar que efectivamente los riesgos del negocio disminuyan. Sin poder social las garantías son mucho menores y, en consecuencia, los riesgos aumentan. Es así que un narcotraficante logra que una autoridad dada no lo expropie o lo capture solo si un político, que tiene influencia sobre el Estado porque recibe los votos de una comunidad, influye sobre la decisión de reprimir de la autoridad. De igual modo, este narcotraficante puede recibir protección de un paramilitar porque este domina la sociedad de una región entera al margen de la intervención de las autoridades estatales. En ambos casos es la organización del dominio de un sector de la sociedad, bien sea por medio de una maquinaria electoral o de un ejército privado, lo que permite convertir el capital de los narcotraficantes en un medio de protección efectivo. No es casual que en los mercados del Primer Mundo, donde la dominación social no está asociada a la oferta de protección a los narcotraficantes, se produzca el mayor crecimiento en el valor agregado de la droga. Allí los riesgos son mayores porque el rechazo de la sociedad a ser gobernados por autoridades corruptas es tan alto, así sea en una comunidad marginal, que la provisión de seguridad que la clase política puede ofrecer a los narcotraficantes es bastante restringida (Duncan, 2014).

Los narcotraficantes colombianos, al igual que los narcotraficantes de otras partes del mundo, tuvieron que desarrollar mecanismos de reducción de riesgos alrededor de las dos principales fuentes de protección y de amenaza disponibles: el Estado y los otros criminales. Pero a diferencia de otros narcotraficantes, los colombianos tuvieron que contar con un actor adicional: las guerrillas. Como organización que ejercía una fuerte dominación social en muchas áreas del país, sobre todo en áreas de reciente colonización campesina, las guerrillas tenían cómo amenazar pero también cómo proteger a los narcotraficantes. En las fases iniciales del actual conflicto capos del Cartel de Medellín como Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y ‘El Mexicano’ Rodríguez Gacha ubicaron sus laboratorios y pistas clandestinas en zonas dominadas por guerrillas como las

FARC y el EPL²⁵. A cambio de una parte de las rentas del negocio recibían protección contra el Estado para sus centros de fabricación de cocaína y las pistas de llegada y salida de mercancía.

No tomaría mucho tiempo para que la guerrilla mostrara la otra faceta de las organizaciones que ofrecen protección a los narcotraficantes. En un momento dado se convirtieron en una amenaza de primer orden. La misma capacidad de imponerse como el poder en numerosas regiones de la periferia más apartada del país le permitía reclamar por la fuerza una porción superior de las ganancias de los empresarios de la droga. Ocurrieron entonces los robos de mercancía, las extorsiones, el secuestro y demás prácticas expropiativas documentadas en la sección anterior. Como resultado, los narcotraficantes tuvieron que crear aparatos coercitivos más sofisticados para resolver la amenaza de la expansión insurgente. Los nuevos ejércitos implicaban acelerar los procesos de dominación social que el narcotráfico estaba propiciando en numerosas zonas rurales y de desarrollo intermedio en Colombia. En esos espacios geográficos, dada la menor presencia de autoridades estatales, solo era posible neutralizar los riesgos de la guerrilla ejerciendo algún tipo de control sobre la población. Lo que implicaba que unas organizaciones de origen puramente criminal debían asumir funciones básicas de un Estado como la vigilancia, la administración de justicia y, en determinadas circunstancias, la organización de la provisión material de las comunidades.

Sin necesidad de elaborar mayores discursos ideológicos, los narcotraficantes asumieron un papel político al ejercer como autoridad y al establecer una serie de alianzas con otros sectores de las élites, principalmente en las zonas periféricas donde la amenaza insurgente era mayor. El establecimiento de alianzas no pasaba solo por el tema de la lucha contrainsurgente. Los narcotraficantes tenían que asegurar también el respaldo de la clase política y de las autoridades públicas para evitar que las instituciones estatales pusieran en riesgo su negocio y su integridad física. En el nivel regional, estos acuerdos fueron facilitados por la necesidad y la oportunidad de acceder a recursos por parte de sectores políticos y económicos que veían cómo sus actividades productivas se rezagaban ante la acumulación de capital que tenía lugar en el centro. El desarrollo del sector industrial y de servicios en las áreas urbanas, así como el abandono del proteccionismo económico, había dejado a las élites rurales que dependían de la producción agraria en una posición política aún más desventajosa con respecto a las élites nacionales. Los diversos estudios económicos demuestran una fuerte tendencia hacia la agudización de las brechas productivas entre zonas ricas y pobres (Galvis y Meisel, 2012). La apertura significó una crisis para lo

25 Los casos de los famosos laboratorios Tranquilandia y Villa Coca en los Llanos Orientales y de pistas de salida de drogas como Caballo Blanco en Córdoba son la demostración que los narcotraficantes pudieron trabajar de la mano con las guerrillas mientras no existía competencia territorial.

que (Revéiz, 1997) llamaba los gremios-región, es decir élites regionales especializadas en algún producto agrícola.

Para los políticos profesionales de la periferia, las alianzas con los narcotraficantes eran definitivas en la competencia por una posición importante dentro del sistema democrático. No solo los viejos caciques y electores tradicionales que contaban con una base de recursos propia tuvieron una oportunidad para incrementar sus votaciones y reclamar una participación mayor en el gobierno. Muchos políticos regionales sin mayores recursos, reconocimiento y trayectoria también pudieron ser más competitivos gracias a la financiación de los empresarios de la droga. Incluso los “tenientes de barrios” y eslabones más bajos del sistema pudieron catapultarse a posiciones nacionales como grandes electores (Velasco, 2014). Pero no solo los políticos de la periferia sacaron provecho de los nuevos recursos disponibles. Hay documentación acerca de la recepción de dineros del narcotráfico por varias campañas presidenciales (Duncan, 2014).

Los narcotraficantes tenían fuertes incentivos para financiar la política como medio de protección de un negocio que les reportaba varios miles de millones de dólares por año y que progresivamente se iba tornando más riesgoso. A medida que incrementaban su poder, o que pretendían incrementarlo, la retaliación por el Estado fue mayor. Pablo Escobar fue dado de baja en 1993 luego de haber planteado una dura guerra contra el Estado. Durante más de una década cometió magnicidios, secuestró familiares de la clase dirigente de Bogotá, llenó de bombas las ciudades y pagó millones por cada policía asesinado hasta doblegar la voluntad de la sociedad. En 1991 logró que la extradición fuera abolida en la nueva Constitución. El Cartel de Cali, por su parte, utilizó una estrategia más sutil. Literalmente compró al grueso de la clase política del país al punto que era imposible continuar manteniendo la estructura de corrupción sobre la que se soportaba el sistema. Menos de un año después de la eliminación de Escobar el escándalo estalló por la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, quien se vio obligado a capturarlos.

Pero en la corrupción de la clase política y de las autoridades públicas por el narcotráfico había un componente menos evidente pero más significativo en la configuración del conflicto que la simple demanda por protección de un negocio ilegal. El pago a la institucionalidad del país tenía un sentido adicional a la pura inmunidad de las empresas narcotraficantes. Ciertas organizaciones criminales que controlaban el tráfico de drogas en un territorio dado pagaban sobornos para que el Estado no les impidiera ejercer como autoridad sobre una parte de la población, y a veces toda la población, de ese territorio. De hecho, el paramilitarismo derivó como uno de los principales problemas de Colombia a finales de la década de los noventa y principios del nuevo siglo más por la progresiva autonomía que ganaron los narcotraficantes en el ejercicio del gobierno local que por la organización de la contrainsurgencia por agentes privados. La violencia contra la población civil y las viola-

ciones de todo tipo de derechos crecieron a ritmos asombrosos como consecuencia de sus prácticas de dominación local. A su vez, agentes del Estado de todo tipo –civiles, militares, judiciales y policivos– establecieron fuertes alianzas con estos narcotraficantes por el poder que habían acumulado desde la periferia. El respaldo político y económico de algún jefe paramilitar para ser elegido al Congreso o a una gobernación o para ser ascendido en el Ejército o en la carrera judicial podía hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso²⁶.

Lo que había comenzado como una defensa de los narcotraficantes contra la expansión territorial de la guerrilla y el riesgo de secuestro había terminado en un proyecto autónomo de gobierno en la periferia por ejércitos privados. Este proyecto comenzó en 1994 inmediatamente después que Pablo Escobar fue dado de baja. Se trató en realidad del único proyecto nacional paramilitar. Los grupos paramilitares anteriores, como los del Magdalena Medio y los de Fidel Castaño en Córdoba, estaban en otro nivel. Su capacidad de ejercer como autoridad independiente de otros actores de poder era muy restringida. La clase política, los mandos militares y los narcotraficantes que los financiaban a la distancia tenían aun suficiente injerencia sobre sus actuaciones y al mismo tiempo era limitada su capacidad de combate y de control territorial. Las incursiones hacia nuevos territorios, previamente controlados por la guerrilla, como la realizada por el ‘Mexicano’ hacia el Putumayo o Fidel Castaño hacia Urabá en los ochenta terminaron en sendas derrotas. El nuevo ejército, organizado por Carlos y Vicente Castaño, era un proyecto mucho más complejo que las reacciones locales contra la amenaza guerrillera. Era una tropa formada y armada como parte de un proyecto de expansión nacional contrainsurgente, capaz de incursionar en nuevos territorios, expulsar a las guerrillas y ejercer un dominio absoluto sobre la población.

La agenda de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la denominación escogida en 1996 para nombrar a los ejércitos paramilitares afiliados al proyecto de los hermanos Castaño, estaba sujeta por supuesto al control de los grandes corredores y centros de producción de drogas²⁷. Su estrategia de guerra podía llegar a ser aún más brutal y sangrienta que la de los anteriores grupos paramilitares. Se cometieron masacres, desplazamientos y un sinnúmero de violaciones de derechos humanos para expulsar a las guerrillas de sus territorios. El propósito era convertirse en la

26 Los escándalos sobre altos cargos en el organigrama del Estado que han sido elegidos gracias a respaldo de narcotraficantes y paramilitares abundan. Santoyo, general de la Policía, fue extraditado por vínculos con narcotraficantes y paramilitares. Sobre el fiscal Mario Iguarán hay bastante evidencia testimonial que debió su elección a los sobornos de las AUC.

27 Corredores y centros de producción como el nudo del Paramillo, la serranía del Perijá, la serranía de San Lucas, la sierra Nevada de Santa Marta, el cañón de las Garrapatas y el andén pacífico nariñense más temprano que tarde se convirtieron en escenarios de guerra entre paramilitares y guerrillas.

autoridad política del territorio de modo que la protección y el control del negocio estuvieran garantizados. Sin embargo, el asunto de la pura codicia como motivación para hacer la guerra escondía otra realidad. El poder se convirtió en un fin en sí mismo. Los líderes paramilitares no solo querían ser inmensamente ricos a través del control de las rentas de las drogas y demás economías extractivas de la periferia, sino también inmensamente poderosos al gobernar regiones enteras con sus propias instituciones. En ese sentido tenían una genuina vocación contrainsurgente pues solo derrotando a las guerrillas podían acumular el poder suficiente para gobernar las áreas periféricas del país y controlar las rentas de la droga.

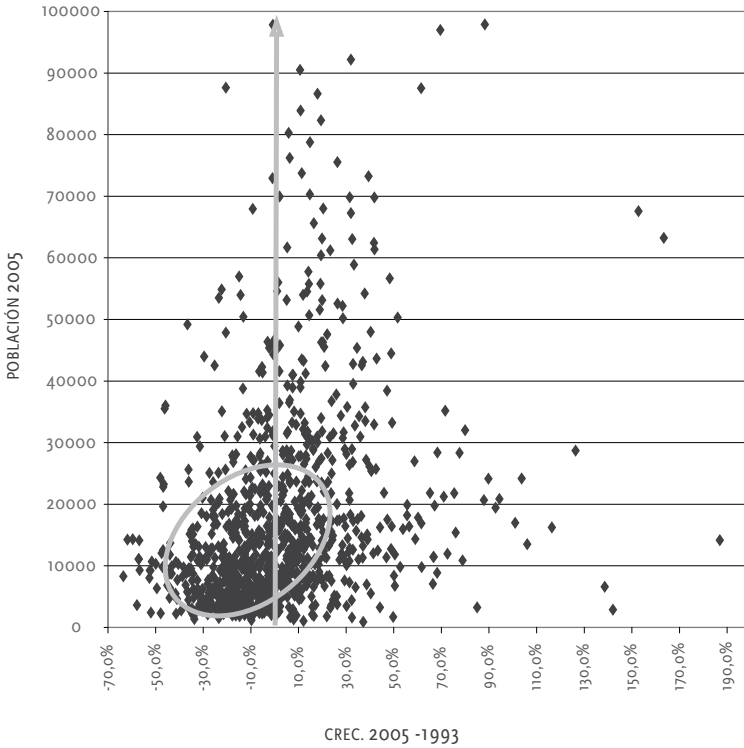
La ofensiva de las guerrillas en esa época tampoco se quedó atrás²⁸, lo que profundizó los apoyos regionales al proyecto paramilitar de las AUC por otras élites y por sectores subordinados de la periferia. Los secuestros rompieron todas las marcas y registros anteriores. En particular la masificación de las pescas milagrosas provocó que cualquier miembro de la comunidad que corriera el riesgo de ser secuestrado apoyara a las AUC, aun a pesar de conocer las brutalidades que podían llegar a cometer. Como siempre, la exclusión de los servicios de protección y justicia se constituyó en la necesidad más apremiante de las comunidades. Por consiguiente, cualquier actor irregular que ofreciera estos servicios, así fuera de manera oprobiosa, ganaba una enorme legitimidad entre la población. Si algo legitimó el avance de las AUC en las regiones colombianas en la segunda mitad de los noventa fue la inseguridad provocada por la ofensiva de las FARC. Pero además de la prestación de servicios de protección y justicia, otro factor fortaleció la aceptación del control paramilitar. El conflicto había propiciado un proceso de urbanización y concentración urbana. Si se comparan los censos de 1993 con los de 2005 se encuentra que Bogotá y Medellín incrementaron su población en al menos un 19%, y Cartagena en un 19,4%. Ciudades menores pertenecientes a las áreas metropolitanas de los grandes centros urbanos del país, como Soledad, Soacha, Envigado y Girón, crecieron a tasas del 79,3%, 59%, 40,5% y 56,4%. Mientras que ciudades intermedias como Santa Marta, Villavicencio, Apartado y Yopal crecieron al 32,6%, 39,7%, 68,4% y 86,5%.

Si se comparan las tasas de crecimiento de las ciudades anteriores con los municipios de menos de 100.000 habitantes, se tiene que su crecimiento ha sido menos dinámico en promedio. El Gráfico 2.4 nos muestra el comportamiento de dichos municipios entre los censos de 1993 y 2005. Los municipios de entre 40.000 y 100.000 habitantes mostraron en general una tendencia al crecimiento similar a las grandes ciudades (en un margen alrededor del 10% y 30%), aunque se presentan muchos más casos de crecimiento negativo (margen izquierda de la

28 En realidad la ofensiva de la guerrilla era parte de su plan militar de toma del poder establecido en conferencias y discusiones internas anteriores a la contraofensiva de las AUC.

flecha que indica el 0% del Gráfico 2.4). Mientras que cuando se trata de municipios de menos de 40.000 habitantes se halla una concentración bastante llamativa en áreas de crecimiento negativo o inferior al 10% (puntos señalados al interior del círculo), pese a los casos de municipios con tasas de crecimiento absurdas por encima del 100%. Por lo general, estos casos se deben a bonanzas de productos criminales como la coca o de economías extractivas (carbón, maderas, etc.). Un ejemplo ilustrativo de municipios que crecen por la bonanza de un sector extractivo es Mapiripán, que a pesar de los hechos espeluznantes de la masacre de 1996, su población rural creció en un 144% entre los dos censos debido al auge de los cultivos de coca.

GRÁFICO 2.4. POBLACIÓN VERSUS TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (2005-1993) EN LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 100.000 HABITANTES



Fuente: DANE.

Lo irónico es que el mismo conflicto, al proteger las rentas del narcotráfico, ha provisto los medios económicos para la inclusión en el mercado de sectores marginales que hasta entonces no disponían de medios de pagos suficiente para participar en el consumo de masas. Los flujos de capitales de la droga junto a la aglomeración de población permitieron a muchas comunidades de la periferia desarrollar el sector

terciario de la economía. Abundaron los comercios y servicios que atendían la nueva capacidad de pago de los pobladores. Podría ser un desarrollo precario, apenas incipiente, de jóvenes campesinos que se convertían en mototaxistas o vendedores de minutos de celular, pero era un cambio social de enormes proporciones. De vivir en el campo en condiciones de aislamiento, pasaron a ser parte de comunidades que tenían contacto con medios de comunicación globales como televisión por cable, internet y celulares. Las expectativas de trabajo y socialización ahora eran otras. Ya no eran acceder a un pedazo de tierra o a un jornal justo, sino encontrar alguna ocupación informal o ser beneficiario de algún subsidio estatal. La inclusión en el mercado y en el Estado era evidente.

La legitimación del narcotráfico como fuente de recursos para acceder a los mercados entre la población de la periferia no correspondió exclusivamente a los paramilitares. Las sociedades productoras de hoja de coca, de hecho las sociedades más periféricas del país, demandaban un actor que protegiera sus fuentes de ingresos. Las guerrillas, que ya eran el Estado en las zonas de colonización campesina donde se ubicaron los cultivos, se especializaron en el gobierno de estas sociedades (Molano, 1987; Jansson, 2008). Como autoridad de las regiones productoras de coca, protegían a los colonos cocaleros de las fumigaciones del Estado y de las incursiones de grupos paramilitares. La protección de todas maneras era costosa. Los cocaleros debían pagar una parte significativa de sus ganancias a las FARC. Existían impuestos por hectáreas cultivadas, gramos de base de coca vendida y demás transacciones económicas que tuvieran lugar en la zona. Más aún, sobre los colonos reposaba la mayor parte del riesgo de la empresa narcotraficante en sus fases primarias. Si sus cultivos eran fumigados o erradicados por el Estado las pérdidas debían asumirlas ellos. Pero poco importaban los riesgos y la explotación de las guerrillas. Era la única manera disponible de acceder a los mercados globales desde regiones remotas con tan baja acumulación de capital.

La consecuencia de la legitimidad de un orden social basado en los excedentes del narcotráfico en sociedades periféricas fue un conflicto fundado en una economía política capaz de soportar su duración indefinida. Tanto las comunidades de la periferia como guerrillas y paramilitares construyeron órdenes y proyectos de gobierno, al margen del Estado central, que estaban fundados en los excedentes de una actividad ilegal. Estos proyectos de gobierno no eran una anomalía en tiempos de guerra que iban a durar hasta que alguno de los bandos doblegara militarmente al otro. Eran, por el contrario, formas de gobierno capaces de funcionar indefinidamente y coherentes con las posibilidades de accesos a los mercados globales dadas las restricciones de capital en la periferia²⁹.

29 Duffield (1998) se ha referido a este tipo de guerra como guerras post-modernas en el sentido que ciertas guerras posteriores al fin de la Unión Soviética, en vez de guerras como tal, son proyectos políticos permanentes de gobierno en zonas aisladas pero conectadas a los mercados globales.

UNA GUERRA POR LA IMPOSICIÓN PARCIAL DE INSTITUCIONES DE CONTROL SOCIAL

La historia narrada en las secciones anteriores muestra una versión distinta a la de una insurrección de sectores excluidos de la sociedad que, a través de guerrillas marxistas, plantearon una guerra al Estado y a las élites para resolver sus carencias materiales y políticas. Muestra, más bien, un conflicto cruzado por diversas motivaciones y actores, en que no es preciso dividir las partes enfrentadas en una insurgencia que representa los intereses de clase de los grupos excluidos y un Estado que representa los intereses de “oligarquías” políticas y económicas. Ni la mayoría de los excluidos tomaron partido o sintieron que sus intereses estaban representados por la insurgencia, ni puede hablarse de un bloque homogéneo de sectores de élite que han enfrentado a la insurgencia para evitar procesos redistributivos de la riqueza y el poder. Todo lo contrario. Muchos sectores subordinados en el orden social escogieron ir a la guerra y colaborar del lado contrario a las guerrillas porque tenían mayores probabilidades de resolver sus problemas de exclusión en ese bando o, al menos, era una opción mucho más atractiva para sus problemas inmediatos de seguridad.

De hecho, la dinámica propia de la guerra transformó las que pudieron ser las motivaciones originales de los combatientes rasos y de las comunidades que los apoyaban cuando quedó claro que el proyecto de toma del poder por las guerrillas era irrealizable. La guerrilla imponía enormes sacrificios que no eran compensados con mejoras en el corto y mediano plazo de sus condiciones de vida. Los combatientes rasos, además de los costos personales que significaba hacer la guerra, no recibían salarios (Gutiérrez Sanín, 2003). Las comunidades que estaban bajo el control territorial de las guerrillas debían cargar con gran parte de los costos de la guerra insurgente y eran objetos de ataques por parte de las fuerzas de seguridad estatales y los grupos paramilitares. Muchas masacres y desapariciones de civiles inocentes fueron el resultado de haber sido identificados como colaboradores de la guerrilla. No importaba que su colaboración con la guerrilla, en términos del pago de un excedente de su producción y de comportarse de acuerdo a las normas impuestas por la insurgencia, fuera resultado de una relación impuesta por la fuerza. En su momento, estas razones fueron dejadas de lado ante la prioridad de destruir la base social de la insurgencia. Igual sucedió con la población asociada como base social de los paramilitares, que experimentaron las retaliaciones de las guerrillas.

Para las élites el conflicto también significó cambios en cuanto a sus aspiraciones e intereses, al margen del gran pulso de fuerza entre la defensa de la democracia capitalista y la revolución comunista propuesta por las guerrillas. El caso del secuestro y el narcotráfico muestran precisamente que otros motivos tuvieron entonces más importancia que los grandes objetivos y estrategias de guerra. En la práctica, secuestrar y controlar las rentas de las fases primarias del narcotráfico ha sido

para la guerrilla un asunto más importante que dirigir un ejército para tomarse el poder en Bogotá, un objetivo que siempre estuvo fuera de su alcance. En el mismo orden de ideas, para las élites regionales la preocupación era cómo evitar que las guerrillas secuestraran y destruyeran el orden establecido, así hubiera que incurrir en la organización de la violencia privada y, posteriormente, a alianzas con narcotraficantes. Sus apremios no estaban en la gran dirección de la guerra interna desde Bogotá para propinar una derrota definitiva a la insurgencia, sino en la provisión de seguridad contra el secuestro, la extorsión, los atentados y demás prácticas expropiativas en cada una de las regiones donde habitaban.

Estas diferencias de objetivos en el conflicto se expresaban a su vez en profundas divisiones y tensiones entre las élites del centro y de la periferia, pero también en arreglos políticos explícitos y tácitos sobre la manera como cada una de ellas iba a afrontar la amenaza de la guerrilla dadas las circunstancias. El asunto en cuestión era hasta qué punto el Estado central iba a asumir los costos que implicaba la provisión de seguridad en la periferia y cuáles iban a ser las concesiones en materia del ejercicio de la coerción privada que se harían por no poder ofrecer una protección efectiva contra la guerrilla. A mediados de los ochenta, cuando el secuestro se disparó, era claro que el Estado no tenía cómo evitarlo. Tampoco hubo determinación entre las élites políticas del centro para incrementar el gasto y el pie de fuerza del Estado, de modo que las élites regionales tuvieran certeza de que la situación podía revertirse en el corto plazo de la mano de las autoridades. Bien fuera porque no estaban dispuestas a financiar la seguridad de una élite regional poco competitiva y que poco tributaba³⁰, porque preferían dejar que los narcotraficantes pagaran por la seguridad de las regiones o porque estaban más preocupados por la guerra contra Pablo Escobar, el hecho fue que el Estado central delegó en gran parte el asunto de la protección en la periferia a la contrainsurgencia privada.

El acuerdo era que el nivel central del Estado si bien no invertía en la producción de seguridad contra la amenaza regional de la guerrilla a los niveles necesarios para mantener la tranquilidad de las élites locales, tampoco interfería de manera significativa en la conformación de grupos paramilitares. Más aún, la tolerancia llegaba hasta permitir que las fuerzas de seguridad del Estado tuvieran complicidad con la contrainsurgencia privada de todo tipo, desde campesinos hasta narcotraficantes. El resultado fue un cambio dramático en la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos. En el informe del Grupo de Memoria Histórica (2013) es notorio cómo el porcentaje de violaciones a los derechos humanos

30 Entre muchos sectores de élite política y tecnocrática se culpaba a la ausencia de una reforma agraria y de la poca productividad y capacidad de generación de mercados internos de la ganadería extensiva del atraso económico de las regiones. El caso del presidente Lleras Restrepo y la ANUC está muy bien documentado en Zamocs (1985).

(masacres, homicidios, desapariciones, etc.) recae principalmente sobre paramilitares y no sobre los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero el acuerdo político no se limitaba a las élites del centro y de la periferia. Los acuerdos también involucraron a sectores subordinados. La provisión de protección y de algún tipo de justicia en sociedades donde las instituciones estatales eran inoperantes, así como la conformación de redes clientelistas que se beneficiaban de los flujos de recursos del narcotráfico, fueron suficiente para que muchas comunidades en la periferia colaboraran con la dominación de los grupos paramilitares. La imposición paramilitar en un principio estuvo dada por iniciativas de carácter muy localista, en que el propósito era expulsar a las guerrillas del área o evitar que ingresara al territorio. Por consiguiente, el involucramiento de sectores subordinados estaba dado por el proceso de expansión de la guerrilla. Si algún grupo guerrillero llegaba a la zona debían elegir hasta qué punto colaboraban en su pretensión de controlar la comunidad o si preferían abandonar el lugar. Los riesgos eran enormes porque si un grupo paramilitar incursionaba, iba a tomar retaliaciones contra la población civil.

En 1994 la situación se tornó aún más crítica porque, como se comentó en la sección anterior, surgió un grupo paramilitar con un proyecto de expansión nacional. Los hermanos Castaño crearon una organización que absorbía los grupos paramilitares regionales con el objeto de expandirse territorialmente, controlar las rutas del narcotráfico y, eventualmente, negociar su legalización como parte política del conflicto. El conflicto contaba ahora con otro actor capaz de interactuar estratégicamente más allá de lo local. No era además un actor cualquiera. Se trataba de poderosos criminales con el control de las principales rentas de drogas del país que reclamaban un papel político por ejercer como autoridad en amplios territorios. Su expansión significaba un cambio de lealtades de muchas comunidades previamente dominadas por las guerrillas, luego de un violento proceso de desplazamientos, masacres, asesinatos selectivos y desapariciones. Pero quienes quedaban en la zona o la repoblaban se convertían en sujetos de sus instituciones de regulación social.

Fue así que la capacidad de controlar sociedades y de expulsar la guerrilla de extensos territorios le permitió a un grupo de narcotraficantes incrementar su capacidad de interactuar con el Estado y otros actores de poder. Al tener que tomar algún tipo de decisión política estos últimos debían considerar sus efectos en las sociedades que dependían del narcotráfico para obtener protección frente a la insurgencia y para resolver su inclusión en los mercados. Los costos sociales de reprimir a los paramilitares alcanzaron a ser tan altos en determinado punto, que se convirtieron en un disuasivo a la potencial capacidad represiva del Estado contra el narcotráfico. Por ejemplo:

Colectividades políticas no necesariamente corruptas podían promover una normatividad laxa con el trabajo informal ligado a mafias de las drogas para

evitar mayores conflictos sociales. O las élites económicas que concentraban el grueso del capital legal podían presionar por una relajación de la persecución contra los paramilitares para evitar que los costos de la provisión de demandas sociales fueran cargados a su cuenta con nuevos impuestos. La ausencia de decisiones políticas era, en el fondo, una delegación de poder que el resto de actores poderosos habían hecho a los aparatos coercitivos del narcotráfico por su capacidad de regulación social. (Duncan, 2014:105)

El conflicto interno colombiano ha sido entonces un asunto más complejo que dos partes que tomaron las armas para defender dos proyectos antagónicos de sociedad. No fue una guerra total entre un Estado que junto a organizaciones paramilitares defendían los privilegios de determinadas élites contra unas guerrillas que aspiraban a reivindicar sectores excluidos a través de una revolución comunista. Fue más bien una guerra en que la gran estrategia del Estado y de la insurgencia por doblegar a su contrincante tuvieron que ceder ante motivaciones menores de otros actores que no necesariamente provenían de sectores tradicionales de élite ni se enmarcaban en las grandes transformaciones del Estado y la sociedad. El asunto era sobre cómo gobernar comunidades periféricas durante tiempo indefinido, sin importar cuanto durara la guerra, para extraer toda una serie de recursos, desde económicos hasta políticos, a través de prácticas criminales. Muchos narcotraficantes podían así disponer de santuarios de inmunidad desde donde acumular riqueza y reclamar al Estado un tratamiento político distinto al de delincuentes comunes. La guerrilla también podía acumular recursos y causar suficiente daño para exigir al Estado algún tipo de negociación favorable dada su nula capacidad de obtener una victoria militar y su pobre representación de las preferencias políticas de la población.

Por su parte, el Estado debía afrontar una guerra que rebasaba lo militar. Se trataba de construir y adecuar sus instituciones para regular y atender las demandas sociales de enormes capas de la población que habitaban en la periferia del país y que antes no eran su foco de atención. El hecho de que si no intervenía para reclamar su autoridad sobre ellos otras organizaciones armadas iban a hacerlo, se convirtió progresivamente en un desafío difícil de obviar. La reacción fue en una primera instancia delegar la regulación de la periferia a ejércitos privados, incluyendo los de los narcotraficantes, que no amenazaban con desbordar su poder hacia los intereses de las élites del nivel central. Sin embargo, la criminalidad generó un proceso de acumulación de poder entre los actores armados distintos al Estado que, aunque no amenazaba con llevar la guerra en pleno hasta el centro del país, sí amenazaba con poner en duda la autoridad del Estado en extensos espacios del territorio y conceder demasiado poder al narcotráfico que combatía la insurgencia en la periferia. El Estado se vio obligado, en consecuencia, a asumir los costos de llevar sus instituciones de regulación hasta esos espacios.

Así haya sido un proceso progresivo, en ocasiones paquidérmico, los resultados saltan a la vista en dos aspectos cruciales. Por un lado,

el Estado ha invertido enormes cantidades de recursos en la creación de una infraestructura que permita llevar sus instituciones a la periferia. Una revisión de los cambios en indicadores básicos como el pie de fuerza del Ejército y la Policía, los cupos en educación, los kilómetros de vías, el número de jueces, etc., muestran que los medios para que la población adopte las normas, comportamientos y demás normas legales establecidas por el Estado se han incrementado dramáticamente durante las últimas décadas. Por otro lado, el Estado, aun en regiones donde guerrillas, paramilitares y mafias ejercen un amplio control sobre la población, ha ampliado los espacios y transacciones que caen bajo el paraguas de regulación de sus instituciones. La gente cada vez utiliza más al Estado como la institución reguladora de la vida social. La prueba de la penetración institucional del Estado es que hasta la propia guerrilla lo utiliza para garantizar los derechos de propiedad de las tierras que expropia. Luego del despeje de la zona del Caguán en 2002, una región bastante periférica bajo el control de las FARC, se descubrió que las guerrillas habían utilizado notarías del Estado para asegurar su propiedad de numerosas tierras robadas. Esto no quiere decir que la amenaza de la guerrilla y los nuevos grupos paramilitares sean despreciables al día de hoy, sino que progresivamente se reducen sus márgenes de control territorial como instituciones que regulan la vida de las comunidades.

En últimas, si se quiere entender el conflicto colombiano como un gran enfrentamiento alrededor de los reclamos por inclusión de diversos sectores sociales, es necesario hacer dos lecturas. Una primera lectura es que unas guerrillas marxistas se rebelaron contra el Estado y las élites por las condiciones de exclusión de la población. El objetivo de estas guerrillas era que al final de la confrontación, luego de vencer militarmente al Estado, tuviera lugar una revolución social o, en el peor de los casos, obligar a las élites nacionales a pactar una serie de reformas que aliviaran los problemas de exclusión por los costos tan altos de hacer la guerra, tal como ocurre hoy en La Habana. En la práctica, las guerrillas nunca estuvieron cerca de ganar la guerra. Solo en circunstancias especiales pudieron llevar a cabo guerras de movimiento, nunca guerra de posiciones. En consecuencia, sus máximos logros han sido obtener concesiones del Estado y las élites a través de acuerdos de paz. Estas concesiones han estado centradas principalmente en la asimilación de la jefatura insurgente dentro de las instituciones políticas del Estado³¹.

Una segunda lectura consiste en comprender el conflicto en sí mismo como una oportunidad de inclusión al margen de los grandes

31 Algunos casos han sido sumamente exitosos, como Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf, que alcanzaron a ganar la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Nariño. Se trata del típico resultado de las luchas políticas de los movimientos de pobres descritas por Piven y Cloward (1979), en el que las élites son asimiladas a las instituciones estatales a cambio de mínimas variaciones en el orden social.

propósitos políticos de las partes y de los resultados de la guerra. Las oportunidades de inclusión estuvieron dadas tanto a comunidades como a individuos por efecto de la redistribución de recursos hacia la periferia a través de la criminalidad. Ya en la sección anterior se aludió al papel que juega el conflicto como un medio de protección del narcotráfico que, a su vez, funciona como un medio de inclusión en los mercados globales de comunidades periféricas. Pero el conflicto es también un medio de inclusión en el poder de individuos de origen popular y marginal. Muchos delincuentes sin mayores perspectivas de poder acabaron convertidos, como líderes de ejércitos paramilitares, en la autoridad de facto de extensas regiones del país. Para estas comunidades e individuos el propósito de la guerra no ha pasado por ninguna gran transformación del Estado y de la sociedad nacional para aliviar sus problemas de exclusión. La guerra es la forma institucional como han podido resolver los problemas de exclusión de manera cotidiana, así hayan tenido que asumir costos enormes en términos de expectativas de vida, pérdida de la libertad, violaciones a los derechos básicos, situaciones oprobiosas de control social y, sobre todo, el riesgo de una violencia permanente.

BIBLIOGRAFÍA

- Agudelo, Mario** (entrevista por Jaime Jaramillo Panesso). *¿Qué pasa en Cuba que Fidel no se afeita? De las armas a la esperanza*. Medellín: ITM, 2005.
- Aguilera, Mario**. *Guerrilla y población civil. La trayectoria de las FARC (1949-2013)*. Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.
- Bejarano, Jesús Antonio; Echandía Castilla, Camilo; Escobedo, Rodolfo y León Queruz, Enrique**. *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997.
- Bernal, Fernando**. *Crisis algodonera y violencia en el departamento del Cesar*. Bogotá: Cuadernos PNUD, 2004.
- Carroll, Leah Anne**. *Violent Democratization Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2011.
- Castillo, Carlos**. *Los días que se arrastran. El secuestro de la "Chiva" Cortés*. Bogotá: Grijalbo, 2014.
- Cloward, Richard A. y Ohlin, Lloyd E.** *Delinquency and opportunity. A theory of Delinquent Gangs*. Nueva York: The International Library of Sociology, 1960.
- Collier, Paul y Hoeffler, Ann**. *Greed and grievance in civil war*. *Oxford Economic Papers*, No. 56, pp. 563-595, 2004.
- Delgado, Álvaro** (entrevista de Juan Carlos Celis). *Todo tiempo pasado fue peor*. Bogotá: La Carreta Editores, 2007.
- Dudley, Steven**. *Armas y urnas: historia de un genocidio político*. Bogotá: Planeta, 2008.

- Duffield, Mark.** *Post-Modern Conflict: Warlords, Post-Adjustment States and Private Protection*. Civil Wars, 1(1). Birmingham: School of Public Policy, University of Birmingham, 1998.
- Duncan, Gustavo.** *Más que plata o plomo*. Bogotá: Debate, 2014.
- *Violencia y conflicto en Colombia como una disputa por el control del estado en lo local*. Bogotá: Documento CEDE, 2004.
- Gaitán, Fernando.** “Una indagación sobre las causas de la violencia”. En Malcom Deas y Fernando Gaitán (eds.), *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: Fonade, 1995.
- Galvis, Luis y Meisel, Adolfo.** *Convergencia y trampas espaciales de pobreza en Colombia. Evidencia reciente*. Banco de la República (CEER), Sucursal Cartagena, 2012.
- García Villegas, Mauricio.** *Jueces sin Estado. La justicia colombiana en zonas de conflicto armado*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2008.
- Grupo de Memoria Histórica.** *¡Basta ya! Colombia. Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013.
- Guillén, Gonzalo.** *Confesiones de un narco*. Bogotá: Intermedio Editores, 2003.
- Gutiérrez Sanín, Francisco.** *El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*. Bogotá: Editorial Debate, 2014.
- *Criminal rebels? A discussion of civil war and criminality from the Colombian experience*. Crisis States Research Centre, Working Papers Series 1, 27. Londres: London School of Economics and Political Science, 2003.
- Hartlyn, Jonathan.** *La política del régimen de coalición: la experiencia del Frente Nacional en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo, Uniandes, 1993.
- Jansson, Oscar.** *The cursed leaf. The cursed leaf: an anthropology of the political economy of cocaine production in southern Colombia*. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008.
- Kalyvas, Stathis.** *The Logic of Violence in Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Lemaitre, Julieta.** *La paz en cuestión. La guerra y la paz en la Asamblea Constituyente de 1991*. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011.
- Meschkat, Klaus y Rojas, José María.** *Liquidando el pasado: la izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética*. Bogotá: Editorial Taurus, 2009.
- Molano, Alfredo.** *Selva adentro: una historia oral sobre la colonización del Guaviare*. Bogotá: El Ancora Editores, 1987.
- Observatorio de Derechos Humanos y DIH.** *Dinámica espacial del secuestro en Colombia (1996-2007)*. Bogotá: Presidencia de la República, 2009.
- Pécaut, Daniel.** *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Espasa, 2001.
- Piven, Frances y Cloward, Richard.** *Poor people's movements: why they succeed, how they fail*. Nueva York: Vintage Books, 1979.
- Pizarro, Eduardo.** *Insurgencia sin revolución: La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*. Bogotá: IEPRI, 1996.

- Ramsey, Russell.** *Guerrilleros y soldados*. Bogotá: Tercer Mundo, 1981.
- Rangel, Alfredo.** *Colombia: guerra de fin de siglo*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1998.
- Revéiz, Edgar.** *El estado como mercado: la gobernalidad económica y política en Colombia antes y después de 1991*. Bogotá: Fonade, 1997.
- Ronderos, María Teresa.** *Guerras recicladas*. Bogotá: Grijalbo, 2014.
- Rubio, Mauricio.** *No llores por Tanja, Colombia. Mujeres en el conflicto armado*. Bogotá: Serie Working papers FIP No. 12, 2013.
- . *Del rapto a la pesca milagrosa. Breve historia del secuestro en Colombia*. Bogotá: Documento CEDE 2003-36, 2003.
- . *Crimen e impunidad*. Bogotá: Tercer Mundo, CEDE Uniandes, 1999.
- Sánchez Jr., Antonio.** *Crónicas que da miedo contar*. Bogotá: Editorial A. Sánchez S, 2003.
- Tirado Mejía, Álvaro.** *Los años sesenta*. Bogotá: Debate, 2014.
- Valencia, León.** *Mis años de guerra*. Bogotá: Norma, 2008.
- Velasco, Juan David.** *La parapolítica revisada: coaliciones de clase, armas y negocios en la provincia colombiana 2002-2006* (Tesis de maestría para magíster en estudios políticos en el IEPRI). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2014.
- Wickham-Crowley, Timothy P.** *Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes Since 1956*. Princeton University Press, 1992.
- Zamocs, Leon.** *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia*. Bogotá: Cinep-UNRISD, 1995.